

bién tiene que haber unas alternativas de las que no somos conscientes. Sobre todo en este momento en que parece que la izquierda ha perdido no sólo su promesa como fuerza de liberación sino incluso su originalidad como alternativa para la próxima elección, se hace difícil creer que no haya ninguna otra posibilidad. Precisamente para sacar al descubierto estas posibilidades abandonadas es para lo que tenemos que volvernos hacia la experiencia histórica.

PRZEWORSKI, Adam: "Capitalism and Social-democracy". Alianza editorial mexicana. 1990. México. Capítulos 1, 2 y 6. 60 Hojas

Propósito  
socialista

## Capítulo 1

### LA SOCIALDEMOCRACIA COMO FENÓMENO HISTÓRICO

#### LA DECISIÓN DE PARTICIPAR

La decisión crucial era la de si participar o no. Acontecimientos anteriores vinieron a parar en el establecimiento del principio de la democracia en el reino de lo político. No obstante, los derechos políticos eran meramente formales cuando iban acompañados de la obligatoriedad y la desigualdad imperantes en el reino de lo social. Tal como nació hacia 1850, el socialismo era un movimiento que había de completar la revolución comenzada por la burguesía quitándole «poder social». El tema recurrente del movimiento socialista desde este momento ha sido la idea de «ampliar» el principio democrático del reino de lo político al de lo social, especialmente en lo económico.

Sin embargo, precisamente debido a que el principio de la democracia ya estaba presente en las instituciones políticas, los medios por los que había de llegarse al socialismo aparecían como una elección. El proyecto de los primeros socialistas comunitaristas era construir una sociedad dentro de la sociedad, una comunidad de productores directos asociados en talleres y fabricantes, cooperando como consumidores y administrando sus propios asuntos. Esta sociedad de productores asociados había de construirse con total independencia del mundo burgués; se trataba de desviarse del naciente orden capitalista y hasta cierto punto del industrial. No obstante, tan pronto como la nueva sociedad burguesa desarrolló sus instituciones políticas —primero la burocracia y el ejército permanente, y luego el parlamento elegido popularmente— la postura de total independencia ya no pudo sostenerse. Ya no se podía afirmar, como había hecho Proudhon, que las reformas sociales no po-

Acción Directa vs. Acción Política

dían ser resultado del cambio político. Incluso si la acción política era realmente ineficaz a la hora de lograr las reformas sociales, una vez establecidas, las nuevas instituciones políticas habían de ser tratadas o como un enemigo o como un potencial instrumento. La elección estaba ahora entre la acción «directa» y la acción «política»: la confrontación directa entre el mundo de los trabajadores y el del capital, o la lucha a través de las instituciones políticas. La construcción de una sociedad dentro de la sociedad no era suficiente: era necesaria la conquista del poder político. Como dijo Marx en su Discurso inaugural de la Primera Internacional en 1864, «para poder emancipar a la clase obrera, el sistema cooperativo ha de desarrollarse a nivel nacional, lo que implica que hay que disponer de medios nacionales... En estas condiciones, el gran deber de la clase trabajadora es conquistar poder político» (1974: 80). De aquí que Marx afirmara que los trabajadores debían organizarse como partido político y que éste debía conquistar el poder con el fin de establecer la sociedad socialista. Pero la cuestión más acuciante era si este partido debía aprovecharse de las instituciones existentes a su alrededor en su búsqueda por el poder político. La democracia política, específicamente el sufragio, era un arma de doble filo para la clase trabajadora. ¿Se debía rechazar esta arma o por el contrario se la debía usar para pasar de la «emancipación política a la social»?

La respuesta anarquista era rotundamente negativa. Lo que los anarquistas temían y afirmaban era que la acción política no sólo era innecesaria e inefectiva sino también que cualquier compromiso con las instituciones burguesas, ya sea como propósito o de hecho, destruiría el verdadero movimiento hacia el socialismo. El Congreso Anarquista de Chaud-de-Fonds advertía en 1870 que «cualquier participación de los trabajadores en la política gubernamental burguesa sólo podría tener como resultado, la consolidación del estado actual de los acontecimientos a la vez que podría paralizar la acción revolucionaria socialista del proletariado», (Droz, 1966: 33). La real consideración de una mejora de la situación de los trabajadores en la sociedad capitalista —una discusión de los códigos internacionales para la protección del trabajo en el mitin inaugural de la Segunda Internacional de 1889— llevó a los anarquistas a afirmar inmediatamente que quienquiera que aceptase las reformas no era un verdadero socialista (Joll, 1966: 45). Alex Danielsson, uno de los fundadores de la Socialdemocracia sueca, afirmaba en 1888 que la participación electoral podía transformar al socialismo «de una nueva teoría de la sociedad y el mundo a un programa insignificante de un partido puramente parlamentario, y a partir de ese instante el entusiasmo en la esencia de los trabajadores se iría extinguiendo y el ideal de la revolución degeneraría en una búsqueda de reformas que agotaría todos los intereses de los trabajadores» (Tingsten, 1973: 352.) Como observó, retrospectivamente Errico Malatesta «los anar-

quistas siempre se mantuvieron puros, y continuaron siendo el partido revolucionario por excelencia, el partido del futuro, pues fueron capaces de resistir el canto de sirenas de las elecciones» (Guerin, 1970: 19).

Aquellos que se hicieron socialistas fueron los que decidieron utilizar los derechos políticos de los trabajadores en las sociedades donde los trabajadores los habían logrado, o lucharon por ellos en las que aún no habían sido alcanzados. La corriente abstencionista perdió apoyo en la Primera Internacional después de 1873 y los partidos socialistas recientemente creados, principalmente entre 1884 y 1892, abrazaron los principios de la acción política y la autonomía de los trabajadores (Haupt, 1980).

No obstante la actitud de los partidos socialistas hacia la participación en las elecciones fue, por lo menos, ambivalente. Esta ambivalencia no era teórica: poco podemos sacar en limpio de interpretar e reinterpretar cada palabra que Marx escribió sobre la democracia burguesa por la simple razón de que el propio Marx y los hombres y mujeres que dirigieron los recién formados partidos y los hicieron entrar en batallas electorales no sabían demasiado bien qué esperar de la competencia electoral. La cuestión principal —que la historia no ha resuelto aún porque no se puede resolver de una vez por todas— era la de si la burguesía habría de respetar su propio orden legal en caso de que el socialismo triunfara en las urnas. ¿Si los socialistas utilizaban la institución del sufragio —establecida por la burguesía en su lucha contra el absolutismo— para ganar elecciones y legislar una sociedad en vías hacia el socialismo, la burguesía no se volvería a la ilegalidad para defender sus intereses? Justamente era lo que había ocurrido en Francia en 1851, y lo más probable era que volviera a ocurrir.

Así pues, la principal cuestión a que se enfrentaban los socialistas era la de si, como planteaba Hjalmar Branting en 1886, «la clase alta respetaría la voluntad popular incluso si la mayoría exigía la abolición de sus privilegios» (Tingsten, 1973: 361). Sterky, el líder de la izquierda de la socialdemocracia sueca, fue uno de los que adoptó una postura claramente negativa: «Supongamos que... la clase trabajadora enviara una mayoría al parlamento; ni siquiera así obtendría el poder. Podemos estar seguros de que la clase capitalista se ocuparía de interrumpir la vida parlamentaria recurriendo a las bayonetas» (Ibid.). Nadie podía estar totalmente seguro: los socialistas austríacos, por ejemplo, prometían en su Programa Linz de 1926 «gobernar en estricta consonancia con las reglas del Estado democrático», pero se veían obligados a advertir que «si la burguesía, boicoteando a las fuerzas revolucionarias, intentara obstruir el cambio social que el movimiento obrero tiene que promover al asumir el poder, la socialdemocracia se vería obligada a emplear sistemas dictatoriales para vencer esa resistencia» (Lesser, 1976: 145). La principal duda acerca de la participación en las elecciones

nes era la de si la revolución no iba a ser necesaria de todas formas, como decía August Bebel en 1905: «como medida puramente defensiva, diseñada para salvaguardar el ejercicio del poder legítimamente adquirido por medio de las urnas» (Schorske, 1955: 43).

En estas condiciones la actitud hacia la participación electoral era comprensiblemente cauta. Los socialistas entraron en la política electoral con extremo cuidado «sólo para utilizarla con fines propagandísticos» y prometieron solemnemente «no entrar en ningún tipo de alianza con otros partidos ni aceptar cualquier otro tipo de compromiso (Resoluciones del Congreso de Eisenach del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en 1870). En el mejor de los casos, el sufragio universal era un instrumento más, si bien tenía «el enorme mérito de desencadenar la lucha de clases...», como explicaba Marx en 1850 (1952a: 47). Las elecciones habían de utilizarse tan sólo como un foro ya organizado para la organización, la agitación y la propaganda. La postura típica queda perfectamente ilustrada con esta moción de 1889: «Dado que el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Suecia es un partido de propaganda, es decir, [considera] que su principal objetivo es la divulgación de información sobre la Socialdemocracia, y dado que la participación en las elecciones es un buen vehículo de agitación, el Congreso recomienda la participación» (Tingsten, 1973: 357). Las elecciones también eran útiles para que la dirección obtuviera una idea del «fervor revolucionario de las masas». Pero eso era todo lo que prometían cuando decidieron la participación. La última edición de *Los orígenes de la propiedad privada, la familia y el Estado* aparecida en vida de Engels, en 1891, todavía afirmaba que el sufragio universal no es más que «la medida de la madurez de la clase trabajadora. En el actual estado de cosas ni puede ser ni será nada más que esto» (1942: 158).

Cada paso hacia la participación volvía a encender la controversia. En el Partido Socialdemócrata Alemán se discutió si permitir o no que uno de sus afiliados fuera viceportavoz del Reichstag, votara acerca del presupuesto, e incluso si debía o no intercambiar votos en la segunda ronda de las elecciones (Schorske, 1955). El Partido Laborista noruego se negó en 1906 al intercambio de votos a pesar de que no entraba en juego ningún compromiso (Lafferty, 1971: 127). En 1898, un resumen de las opiniones de los principales dirigentes de la Segunda Internacional mostraba que, aunque se consideraba recomendable la intervención en la política burguesa, seis de los preguntados votaron «jamás» respecto de la participación en el gobierno, once admitieron que era posible sólo *très exceptionnellement*, y una minoría de doce pensaban que tal participación era o siempre deseable o por lo menos lo era en el caso de Millerand (Fiechter, 1965: 69-75). De los sesenta y nueve socialdemócratas suecos a quienes se preguntó en un telegrama si el partido debía o no entrar en el gobierno liberal de 1911, sesenta y tres con-

testaron en contra (Tingsten, 1973: 418). Aunque algunos partidos «suspendieron» la lucha de clases y entraron en gobiernos de coalición antes de acabar la I Guerra Mundial, incluso en Gran Bretaña la decisión de formar el primer gobierno laborista en 1924 fue tema de intensas polémicas y hubo de explicarse como una oportunidad para adquirir la experiencia necesaria para la era socialista (Lyman, 1957).

Los que se oponían a la participación parecían ocupar un puesto permanente en el espectro político. Conforme los partidos establecidos iban dando los pasos hacia la participación total, surgían nuevas voces que continuaban la tradición según la cual creer en las batallas parlamentarias «entre ranas y ratones» (Luxemburg, 1967: 37) es una manifestación de lo que Marx calificó, en circunstancias muy especiales, de «cretinismo parlamentario» (1952a: 77). Horkheimer repetía en el *memento* anarquista de 1940 que «la integración es el precio que individuos y grupos han de pagar para florecer dentro del capitalismo» (1973: 5). «Las elecciones, una trampa para tontos», era el título de un artículo de Sartre la víspera de las elecciones al parlamento francés en 1973. «*Voter, c'est abdiquer*», vociferaban los muros de París en 1968.

## CAPITALISMO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La abstención electoral nunca ha sido una opción viable para los partidos obreros, pero la participación tampoco podía ser meramente simbólica. Siempre y cuando la competición democrática ofrezca a los diferentes grupos una oportunidad de hacer progresar algunos de sus intereses a corto plazo, todo partido político que pretenda movilizar a los trabajadores tiene que aprovechar la oportunidad.

El capitalismo es una forma de organización social de la producción y el comercio, basada en una avanzada división del trabajo, que se orienta hacia las necesidades de los demás, hacia el comercio. Es, pues, un sistema en el que incluso las personas que participan directamente en la transformación de la naturaleza en productos útiles —los productos inmediatos— no pueden sobrevivir físicamente por sí mismos. Es más, el capitalismo es un sistema en el cual aquellos que no poseen los medios de producción tienen que vender su capacidad de trabajo. Los trabajadores obtienen un salario, que no es un título de ninguna parte del producto que ellos generan, sino un medio abstracto de adquisición de bienes y servicios. Tienen que producir unos beneficios como condición necesaria para continuar en el empleo.

El producto es de propiedad privada en el sentido de que los obreros no pueden intervenir en su asignación o distribución por su papel de productores inmediatos. Los capitalistas, que se apropian de los beneficios, deciden cómo distribuir el producto, sobre todo en lo tocante

los límites de la participación

a cuánto haya de invertirse, dónde, cómo y cuándo. Tales asignaciones se ven limitadas por la competencia entre unos capitalistas y otros, y por el sistema político. La propiedad de los medios de producción también da a los propietarios el derecho a organizar la producción (o delegar su organización). Los capitalistas, como patrones, regulan la organización del trabajo, aunque también aquí se vean limitados por determinadas reglas que emanan del sistema político. Como productores inmediatos, los obreros no tienen derecho institucional a dirigir las actividades de la producción en que participan.

Bajo estas condiciones, la democracia política da a los obreros la oportunidad de luchar por algunos de sus intereses. La política de elecciones electorales es el mecanismo a través del cual todos pueden, como ciudadanos, expresar sus exigencias de bienes y servicios. Si bien como productor inmediato el obrero no tiene derecho institucional a reclamar el producto, como ciudadano puede dar curso a sus exigencias a través del sistema político. Es más, en su papel de ciudadano, diferenciado del productor directo, el trabajador puede intervenir en la organización de la producción y la distribución de los beneficios.

Los capitalistas pueden buscar el logro de sus intereses en el curso de su actividad diaria dentro del sistema de producción. Los capitalistas «votan» continuamente por la asignación de los recursos societarios según decidan invertir o no, emplear o despedir al personal, comprar obligaciones del Estado, exportar o importar. Por el contrario, los trabajadores pueden dar curso a sus exigencias sólo colectivamente y sólo indirectamente, a través de organizaciones incrustadas en sistemas de representación, principalmente sindicatos y partidos políticos. La participación es, pues, necesaria para la realización de los intereses de la mano de obra. Los ideales revolucionarios pueden mover la historia, pero no sirven ni para comer ni para cobijarse. Como ha observado Schumpeter: «una actitud totalmente negativa, aunque bastante satisfactoria en principio, habría sido imposible para ningún partido con un mínimo de importancia. Habría entrado inevitablemente en colisión con la mayor parte de los desiderata de la mano de obra organizada y, de persistir en ella durante un tiempo, habría reducido a sus seguidores a un grupo mínimo de ascetas políticos... Ningún partido puede vivir en un programa que prometa unos beneficios inmediatos» (1942: 16-17).

Si los obreros quieren hacer uso de la oportunidad que les ofrece la democracia, tienen que organizarse como participantes. Y aun cuando esta oportunidad sea limitada, es la única institucionalizada, la única posible para los trabajadores como colectividad. Para que éstos puedan llevar adelante otras formas de lucha, incluida la confrontación directa con los capitalistas, es necesaria la participación en la política democrática. Los socialistas se encontraban ante un Estado hostil, en que las fuerzas

de la represión, permanentemente organizadas, estaban en manos de los terratenientes y la burguesía. En las situaciones en que la lucha armada se hizo inviable debido a los cambios tecnológicos en el arte militar —punto que destacaba Engels en 1895—, el único recurso al alcance de los obreros era la participación parlamentaria. Es importante que el cambio de táctica de varios partidos socialistas tuvo lugar tras el fracaso de las huelgas generales organizadas en torno a problemas económicos. Mientras que las huelgas orientadas a la ampliación del voto si tuvieron éxito en Bélgica y Suecia, el empleo de huelgas masivas con fines económicos tuvo invariablemente un resultado político catastrófico en Bélgica en 1902 (Landauer, 1959, I: 158), Noruega en 1921 (Lafferty, 1971: 191) y Gran Bretaña en 1926 (Miliband, 1975: 148). Todas ellas fueron derrotadas; tras la tormenta los sindicatos se vieron diezmados y se aprobaron una serie de leyes represivas. Estas experiencias de derrota y represión movieron a los partidos socialistas hacia las tácticas electorales. La representación parlamentaria resultó necesaria para proteger al movimiento contra la represión: esa fue la lección que aprendieron los dirigentes socialistas. Como dijo Kautsky alrededor de 1891, «la lucha económica exige unos derechos políticos y éstos no pueden llover del cielo» (1971: 186).

Además, la participación era necesaria porque, como resultado del sufragio universal, masas de individuos pueden tener un efecto político sin estar organizados. Si los obreros no se organizan como clase, es probable que voten siguiendo otras pautas de identificación colectiva, como católicos, bávaros, mujeres, francófonos, etcétera. Organizadas las elecciones y obtenido el derecho al voto, los obreros tienen que estar organizados para votar como tales obreros.

La realidad es que las únicas organizaciones duraderas son aquellas que eligen participar en las instituciones burguesas. Excepto cuando la participación es totalmente ineficaz para alcanzar los intereses de los trabajadores a corto plazo —todas las organizaciones obreras tienen que unirse o desaparecer.

## PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y ORGANIZACIÓN DE CLASE

La razón por la que la implicación en la política parlamentaria de la sociedad burguesa nunca ha cesado de provocar discusiones es que el propio acto de «tomar parte» en este sistema determinado da forma al movimiento socialista y a su relación con los obreros como clase. La cuestión que se nos presenta una y otra vez es la de si la implicación en la política electoral puede conducir al socialismo o si refuerza el orden social existente, es decir, el capitalismo. ¿Puede el movimiento socialista encontrar un paso entre los «dos arroyos» identificados por

Rosa Luxemburgo: «abandono del carácter de partido de masas o abandono de los objetivos finales»? (Howard, 1973: 93). La participación en la política electoral es necesaria si el movimiento hacia el socialismo ha de encontrar un apoyo masivo entre los trabajadores, pero no obstante esta misma participación parece impedir la consecución de los objetivos finales. Trabajar a la vez para el presente y hacia el mañana parece sumirnos en un dilema.

La participación imprime una determinada estructura a la organización de los trabajadores como clase. El efecto de la participación sobre las relaciones internas de clase lo ha analizado mejor que nadie Luxemburgo: «la división entre lucha política y lucha económica y su separación no es sino un producto artificial, aunque históricamente comprensible, del período parlamentario. Por un lado, en el desenvolvimiento pacífico, "normal" para la sociedad burguesa, la lucha económica se fracciona, disgregándose en multitud de luchas parciales dentro de cada compañía, de cada rama de la producción. Por otro lado, la lucha política no la llevan a cabo las masas a través de la acción directa sino, en consonancia con la estructura del Estado burgués, a la manera representativa, por la presión ejercida sobre el cuerpo legislativo (1970a: 202).

El primer efecto de «la estructura del estado burgués» es, pues, que los asalariados se forman como clase en una serie de organizaciones independientes y frecuentemente competitivas, las más de las veces como sindicatos y partidos políticos, pero también en forma de cooperativas, asociaciones vecinales, clubs, etc. Un rasgo característico de la democracia capitalista es la individualización de las relaciones de clase tanto en el nivel político como en el ideológico (Lukács, 1971: 65-6. Poulantzas, 1973). Los mismos que dentro del sistema de producción aparecen o como capitalistas o como asalariados, en la política aparecen indiferenciados como «individuos» o «ciudadanos». Así, pues, aun cuando un partido político logre formar una clase en el terreno de las instituciones políticas, las organizaciones económicas y políticas jamás coincidirán. Los múltiples partidos y sindicatos frecuentemente representarán diferentes intereses y entrarán en competencia los unos con los otros. Es más, mientras la base de los sindicatos se limita a ciertos grupos de gente más o menos permanentemente empleada, los partidos políticos que organizan a los asalariados tienen que movilizar también a gentes que no pertenecen a los sindicatos. Así pues, hay una tensión permanente entre los intereses, más limitados, de los sindicatos y los de los partidos. La clase organizada como participante no aparece como único actor en los conflictos históricos concretos (Milibaud, 1977: 129).

El segundo efecto es que las relaciones dentro de la clase se estructuran como relaciones de representación. El parlamento es una institución representativa: en él se sientan individuos, no masas. La rela-

ción de representación se impone así sobre la de clase por la propia naturaleza de las instituciones democráticas capitalistas. Las masas no actúan directamente en defensa de sus intereses, sino que delegan esa defensa. Esto vale tanto para los sindicatos como para los partidos: el proceso de negociación colectiva está tan distante de la experiencia diaria de las masas como las elecciones. Los dirigentes pasan a ser parlamentarios, y las masas son representadas por los dirigentes: tal es el modo de organización de la clase trabajadora dentro de las instituciones capitalistas. Y de esta manera es como la participación desmoviliza a las masas.

El dilema de cómo organizarse va aún más lejos. La lucha por el socialismo cae inevitablemente en el aburguesamiento del movimiento socialista: éste es el punto clave del clásico análisis de Roberto Michels. La lucha requiere una organización, necesita un aparato permanente y una burocracia asalariada, lo que lleva a que el partido se meta en actividades económicas propias. De aquí que los militantes socialistas se conviertan inevitablemente en burócratas, directores de periódicos, directivos de compañías de seguros, directores de casas funerarias, e incluso *Parteibudiger* —encargados del bar del partido. Todas ellas ocupaciones pequeño burguesas, que «imprimen... una marcada imagen pequeño burguesa», concluye Michels (1962: 270). Como decía recientemente un disidente francés, «la clase obrera está perdida en la administración de unos bastiones imaginarios. Unos camaradas disfrazados de notables se ocupan de la recogida de la basura de los ayuntamientos y de las cafeterías de las escuelas. ¿O es que en realidad son notables disfrazados de camaradas? Yo ya no lo sé» (Konopnicki, 1979: 53).

Un partido que participa en elecciones tiene que encontrar tácticas alternativas: he aquí el dilema de la táctica, tan frecuentemente diagnosticado. Mientras los obreros no consiguieron todos sus derechos políticos, no había que elegir entre la táctica insurreccionaria y la parlamentaria. No cabía la menor duda de que los derechos políticos sólo se podían lograr por medio de actividades extraparlamentarias. César de Paepe, fundador del *Parti Socialiste Brabançon*, decía en 1877: «Haciendo uso de nuestros derechos constitucionales y demás medios legales de que disponemos, no renunciamos al derecho a la revolución» (Landauer, 1959, I: 457). Tal declaración fue frecuentemente citada, especialmente por Engels en 1895. Alex Danielsson, un socialista sueco de la rama izquierdista, sostenía más pragmáticamente que los socialdemócratas no deben comprometerse con «un dogma en lo tocante a la táctica pues ello obligaría al partido a actuar siguiendo la misma rutina en todas las circunstancias» (Tingsten, 1973: 362). Que se utilizaran huelgas masivas para conseguir el sufragio universal (y universal se refería exclusivamente a la parte masculina de la población) era algo que no se discutía, y tanto el partido belga como el sueco organizaron

grandes huelgas que dieron como resultado ampliaciones del derecho de voto.

No obstante, una vez obtenido ese sufragio, se hizo necesaria la elección entre la vía «legal» y la «extraparlamentaria». J. McGurk, presidente del Partido Laborista, lo expresa tajantemente en 1919:

«O somos constitucionalistas o no lo somos. Si somos constitucionalistas, y si creemos en la eficacia de las armas políticas (y creemos, ¿o si no por qué tenemos un Partido Laborista?), será poco inteligente y antidemocrático que, porque no obtengamos una mayoría en las urnas, cambiemos de lado y pretendamos que hemos de sustituir la acción industrial» (Miliband, 1975: 69).

Para conseguir otros votos que los de los obreros, sobre todo los de la pequeña burguesía, para formar alianzas y coaliciones y para gobernar en el interés de los trabajadores, un partido no puede ni parecer «irresponsable», ni dar ningún indicio de no ser absolutamente sincero en su compromiso con las reglas y los límites del juego parlamentario. A veces el partido incluso tiene que sujetar a sus propios seguidores en acciones que pondrían en peligro el progreso electoral. Además, un partido orientado hacia mejoras parciales, un partido en que los líderes-parlamentarios llevan un estilo de vida pequeño burgués, un partido que durante años se ha mantenido alejado de la calle no puede «salir atropelladamente del agujero a las trincheras», como dice Gramsci, incluso aunque el hueco sea producto de una crisis. «El problema de la izquierda revolucionaria en las sociedades industriales estables no es que no tenga oportunidades, sino que las condiciones normales en las que tiene que moverse le impiden desarrollar los movimientos que puedan aprovechar las raras ocasiones en que se les convoca para que actúen como revolucionarios... Ser revolucionarios en países como los nuestros resulta difícil», observa Eric Hobsbawm (1973: 14-15).

El dilema se agudizó todavía más cuando la democracia —la democracia parlamentaria característica de la sociedad burguesa— dejó de ser una mera táctica y fue adoptada como credo básico de la futura sociedad socialista. Los partidos socialdemócratas reconocieron en la democracia política un valor que trascendía las diversas formas de organización de la producción. Jean Jaurès (1971: 71) declaraba que «el triunfo del socialismo no será una ruptura con la Revolución Francesa sino la realización de ésta con nuevas condiciones económicas». Eduard Bernstein (1961) veía en el socialismo simplemente «la democracia llevada a su conclusión lógica». Para los socialdemócratas, la democracia parlamentaria pasó a ser a la vez un medio y un fin, el vehículo hacia el socialismo y la forma política de la futura sociedad socialista, estrategia y programa simultáneamente, instrumental y prefiguración. (Acerca de las opiniones de Kautsky y Luxemburgo, que fueron algo más cautos, véase respectivamente Salvadori, 1971, y Geras, 1976.)

Así pues, los socialdemócratas se encuentran ante un dilema que Gay dramatiza en su biografía de Bernstein:

«¿Es imposible, entonces, el socialismo democrático? ¿O puede conseguirse sólo si el partido decide abandonar temporalmente las formas democráticas para tomar el poder por la fuerza con la esperanza de volver al parlamentarismo en cuanto se asegure el control? Sin duda esta segunda alternativa encierra posibilidades trágicas: un movimiento democrático que recurre a métodos autoritarios para alcanzar sus objetivos puede no volver a ser democrático en mucho tiempo. No obstante, la primera alternativa —el seguir siendo democrático cualesquiera sean las circunstancias— puede condenar al partido a una continua impotencia (1970: 7).

#### LA PROMESA DE ELECCIONES

A pesar de toda la ambivalencia, a pesar de la presión de las preocupaciones a corto plazo, los socialistas entraron en el juego de la política burguesa para ganar elecciones, para conseguir una gran mayoría que les permitiera llevar a cabo transformaciones revolucionarias y para hacer unas leyes socialistas. Este era su objetivo y su esperanza.

La participación electoral se basaba en la creencia de que la democracia no sólo es necesaria sino que es suficiente para alcanzar el socialismo. Como decía Engels en una carta de 1891, que iba a molestar profundamente a Lenin, «si una cosa es cierta, ésta es que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar al poder bajo la forma de república democrática. Incluso diríamos que ésta es la forma específica de la dictadura del proletariado» (1935: 486). Jaurès veía la democracia como «el terreno más amplio y más sólido sobre el que puede situarse la clase obrera... el lecho de piedra que los burgueses reaccionarios no pueden borrar sin abrir grietas en la tierra y tirarse a ellas» (Derfler, 1973: 59). Millerand fue, como siempre, más incisivo: «Para llevar a cabo las reformas inmediatas que puedan aliviar el peso de la clase obrera, y de manera que pueda alcanzar su propia libertad, y para comenzar, condicionada por la naturaleza de las cosas, la socialización de los medios de producción, al partido socialista le es necesario y suficiente entregarse a la toma del poder por medio del voto» (Ensor, 1906: 54).

Los socialistas entraron en las elecciones porque tenían que preocuparse por la inmediata mejora de la situación de los obreros. Pero entraron para hacer llegar el socialismo. ¿Es esta divergencia entre causa y propósito un síntoma de racionalización? ¿El patetismo de los objetivos finales no era una forma de autoengaño?

Pero más vale dejar este tipo de preguntas para que las resuelvan los psicólogos. Eso sí, hay algo seguro: los que metieron a los partidos

socialistas en la lucha electoral creían que las clases dominantes pueden ser «vencidas en su propio juego». Los socialistas estaban profundamente convencidos de que iban a ganar las elecciones, que iban a obtener una tremenda mayoría numérica que los apoyaría. Ponían todas sus esperanzas y sus esfuerzos en la competición electoral porque estaban seguros de que la victoria estaba a su alcance. Su fuerza estaba en el número, y las elecciones son una expresión de la fuerza del número. Así pues, el sufragio universal parecía garantizar la victoria socialista si no inmediatamente, sí en el futuro cercano. La revolución se haría en las urnas. Entre las muchas expresiones de esta convicción tenemos una asombrosa apología de Engels en 1895:

«Los obreros alemanes... demostraron a sus camaradas de todos los demás países cómo utilizar el sufragio universal... se puso en práctica un método de lucha proletaria totalmente nuevo, y este método se desarrolló rápidamente. Se descubrió que las instituciones estatales en que está organizada la sociedad burguesa ofrecen todavía más oportunidades a la clase obrera para luchar contra esas mismas instituciones estatales.»

Y Engels frecuentemente vaticinaba que «si esto [el progreso electoral] continúa así, a finales del siglo habremos... crecido hasta convertirnos en la fuerza decisiva de la tierra, ante la cual todas las demás harán de inclinarse, les guste o no» (1960: 22).

Las bases para esta convicción eran tanto teóricas como prácticas. Ya en el *Manifiesto comunista*, Marx y Engels describían el socialismo como el movimiento de «la inmensa mayoría» (1967: 147). En un artículo de 1850 sobre «The Chartists» en el *Daily Tribune* de Nueva York, y posteriormente en el periódico de los emigrados polacos *Głos Wolny*, Marx repetía que «para la clase obrera de Inglaterra, donde el proletariado representa una gran mayoría de la población, el sufragio universal es equivalente a poder político...». *La lucha de clases* de Kautsky, probablemente la exposición teórica más influyente de los albores del movimiento socialista, sostenía que el proletariado ya representaba la clase más numerosa «en todos los países civilizados» (1971: 43). E incluso si las primeras batallas electorales no suponían un triunfo, incluso si el proletariado aún no era una mayoría, la victoria electoral parecía tan sólo asunto de tiempo porque el capitalismo estaba haciendo crecer las filas proletarias. El desarrollo de la producción fabril y su colarario, la concentración de tierra y capital, habían de conducir rápidamente a la proletarización de artesanos, mercaderes y pequeños agricultores. Incluso «el físico, el abogado, el sacerdote, el poeta, el científico» habían de convertirse en proletarios, según el *Manifiesto comunista*. Este crecimiento del número de personas que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario no era nada accidental, temporal o reversible, era un rasgo necesario del desarrollo capitalista. Así pues,

era sólo cuestión de tiempo hasta que todos, «menos un puñado de explotadores», fueran proletarios. El socialismo convendría a casi todos, y la inmensa mayoría expresaría su voluntad socialista por medio del voto. En 1919, un joven teórico sueco formulaba el siguiente silogismo:

«La lucha por el Estado es política. Su resultado, pues, dependerá en gran medida de las posibilidades que se abran ante los miembros de la sociedad —muchos de ellos proletarios debido al proceso capitalista— para ejercer su influencia sobre la toma de decisiones políticas. Si se alcanza la democracia, el desarrollo capitalista supondrá una correspondiente movilización de voces *contra* el propio sistema capitalista. Así pues, la democracia tiene dentro de sí un artificio que opera automáticamente reforzando la oposición al capitalismo en relación directamente proporcional a su desarrollo.» (Tingsten, 1973: 402).

Naturalmente, mientras aquellos que se hicieron comunistas veían en la Revolución Rusa la prueba de que el éxito de la insurrección siempre es posible, para los socialdemócratas la necesidad de apoyarse en la insurrección de una minoría sólo significaba que las condiciones aún no estaban maduras para el socialismo (Kautsky, 1919). Mientras Branting, por ejemplo, compartía la reacción de Gramsci ante la Revolución de Octubre (véase Fiori, 1973: 112) al afirmar que «la idea de desarrollo socialista se descarta en el bolchevismo», sacando precisamente la conclusión de que el socialismo debe esperar hasta que maduren las condiciones hasta el punto de que una enorme mayoría exprese electoralmente su voluntad de transformación socialista (Tingsten, 1973: 405). Dado que estaban totalmente convencidos de que esas condiciones madurarían gracias al desarrollo capitalista, a los socialdemócratas no les inquietaban los reveses electorales, que significaban, para ellos, que aún no había llegado el momento. Aún en los casos en que hubieron de abandonar el control del gobierno, jamás se vieron tentados a acelerar el curso de la historia. La historia hablaba a través del pueblo, el pueblo hablaba por medio de las elecciones, y nadie dudaba de que la historia haría que el pueblo expresara su voluntad socialista.

Tales esperanzas, basadas en la convicción de cuál sería el curso de la historia, pronto se vieron confirmadas por el progreso electoral de los partidos socialistas. El partido alemán —que Engels pone como modelo a seguir— pasó, a pesar de los años de depresión, de 125.000 votos en 1871 a 312.000 en 1881, 1.427.000 en 1890, y 4.250.000 en vísperas de la I Guerra Mundial. En cuanto se permitió que prescribieran las leyes antisocialistas, el Partido Socialdemócrata Alemán pasó a ser, en 1890, el mayor partido del país con un 19,7 por ciento del voto. Para 1912 el porcentaje había subido al 34,8, más del doble del partido que les seguía en tamaño. No es nada sorprendente que, en 1905, Bebel hiciera «explícita la muy extendida suposición entre sus compañeros socialistas de que la clase obrera había de continuar creciendo y que

el partido llegaría un día a acoger a la mayoría de la población...» (Schorske, 1955: 43). Algunos partidos entraron todavía más espectacularmente en la competencia electoral. En 1907 los socialdemócratas finlandeses obtuvieron una mayoría del 37 por ciento de los votos en la primera elección mediante sufragio universal. Los socialdemócratas austríacos obtuvieron un 21 por ciento después que el sufragio masculino se hiciera universal en 1907, 25,4 en 1911, y 40,8 por ciento en 1919. El *Parti Ouvrier* belga obtuvo un 13,2 por ciento al abolirse el *régime censitaire* en 1894 y siguió creciendo a saltos hasta alcanzar en 1925 la mayoría con un 39,4 por ciento, éxito que «les estimuló a esperar que la industrialización continuada produjera un crecimiento del electorado obrero socialista» (Mabille y Lorwin, 1977: 392). Incluso en aquellos países en que los primeros pasos no fueron tan dramáticos, el progreso electoral parecía inexorable. En Holanda, un país con fuerte influencia de la iglesia, el socialismo avanzaba a grandes pasos, de un 3 por ciento en 1896 a 9,5, 11,2, 13,9 y 18,5 en 1913. El partido danés obtuvo un 4,9 en 1884, primera elección a que se presentó, y 3,5 por ciento en 1889, pero a partir de este momento no dejó de crecer hasta alcanzar un 46,1 por ciento en 1935. También allí «había una general esperanza de que, como único partido representante del movimiento obrero, llegaría al poder al alcanzar una mayoría absoluta del electorado» (Thomas, 1977: 240). El partido sueco comenzó modestamente, presentándose en listas conjuntas con los liberales y obteniendo un 3,5 por ciento en 1902, 9,5 en 1905, 14,6 en 1908, y saltando a 28,5 en 1911 al ampliarse el derecho de voto, subiendo a 30,1 y 36,4 en las dos elecciones sucesivas de 1914, y junto con su rama izquierdista logró la mayoría en 1917 con un 39,1. El Partido Laborista Noruego fue ganando un 5 por ciento del total de votos en las sucesivas elecciones a partir de 1897 en que obtuvo un 0,6 por ciento hasta 1915 que alcanzó el 32,1.

La práctica confirmaba la teoría: las fuerzas del socialismo crecían de elección en elección. Cada nueva ronda era un nuevo éxito. De los pocos miles de los primeros tiempos difíciles, los socialistas pasaron enseguida a ser millones. El progreso parecía imparable, la mayoría y el gobierno que ésta representaba parecían tan sólo cosa de unos pocos años, un par de elecciones más. Otro pequeño esfuerzo y la humanidad entraría en una nueva era por la expresión aplastante de la voluntad popular. «Estoy convencido —decía Bebel en el Congreso de Erfurt— que el logro de nuestros objetivos está tan cercano que hay muy pocos en esta sala que no vayan a vivir lo suficiente para verlo» (Derfler, 1973: 58).

## SOCIALDEMOCRACIA Y CLASE OBRERA

El partido socialista había de representar a la clase obrera organizada. Como observan Bergounioux y Manin (1979: 27), «Y la autonomía de los trabajadores fuera de la política o una emancipación política que no fuera específicamente obrera, tales eran las dos tendencias reinantes en el momento en que Marx y Engels colaboraron en la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores». La decisiva influencia de Marx fue una síntesis de ambas posturas: socialismo como movimiento de la clase obrera en la política. La orientación por la que abogaba era nueva: organizar un «partido», pero un partido que fuera específicamente obrero, independiente de todas las otras clases, y opuesto a ellas. La organización de los trabajadores «en una clase y, por consiguiente, en un partido político» (Marx y Engels, 1967: 144) era necesaria para que éstos conquistaran el poder político y, en opinión de Marx, no debería afectar ni afectaría a la autonomía de la clase obrera como fuerza política. «La emancipación de la clase obrera debe de ser tarea de la propia clase obrera», como dice la famosa frase.

Sabemos por qué Marx esperaba que los trabajadores se convirtieran en la fuerza motriz del socialismo: en virtud de su posición dentro de la sociedad capitalista, los obreros eran a la vez la clase explotada a la manera específicamente capitalista y la única clase que tenía capacidad para organizar la producción por sí misma una vez abolidas las relaciones capitalistas (Mandel, 1971: 23). Sin embargo este énfasis en la «relación orgánica» entre socialismo y clase obrera —concebida como relación entre misión histórica y agente histórico— no explica por sí mismo por qué, durante el período inicial, los socialistas buscaban organizar sólo a obreros y más precisamente a todos los obreros. Las razones de esta privilegiada relación entre los partidos socialistas y la clase obrera eran más inmediatas y más prácticas que las que pueden encontrarse en la teoría de la historia de Marx.

Primero, el capitalismo es un sistema en el cual los trabajadores compiten unos con otros excepto en el caso en que estén organizados como clase. Una posición social similar no produce la solidaridad dado que los intereses que comparten los obreros son precisamente los mismos que les hacen entrar en competencia unos con otros sobre todo al bajar su salario cuando buscan empleo. Los intereses de clase son algo que atañe a los obreros como colectividad y no como colección de individuos, sus intereses son de «grupo» más que «seriales» (Sartre, 1960). Un aumento general de salarios beneficia a todos los obreros, pero no afecta a sus relaciones personales. Por el contrario, una ley que establezca un salario mínimo, que amplíe la edad de la educación obligatoria o que limite las horas de trabajo afecta las relaciones entre trabajadores sin ser necesariamente de interés para todos ellos. Evidente-

mente algunos preferirán trabajar más años que los que marca la edad de jubilación normal aunque de esta forma estén impidiendo que otros puedan entrar a ocupar sus puestos y obligándoles, por tanto, a permanecer sin trabajo; otros, que no encuentran un puesto de trabajo, estarán dispuestos a dejarse contratar por debajo del salario mínimo aunque ello traiga consigo la reducción del nivel salarial general; otros estarán dispuestos a sustituir a los huelguistas aunque ello conduzca al fracaso de la huelga. Como vemos, los intereses de clase no se corresponden con los intereses de los trabajadores como individuos. Los obreros individuales, así como aquellos correspondientes a una determinada compañía o sector, se sienten fuertemente inclinados a perseguir sus intereses particulares a costa del resto siempre que no exista algún tipo de organización —un sindicato, un partido, o el Estado directamente— que imponga una disciplina colectiva. Así pues, para evitar la competencia, los obreros tienen que organizarse y actuar como clase. Como dijo Marx, «la combinación siempre tiene un doble fin: evitar la competencia entre obreros, y que éstos puedan de esta manera competir con los capitalistas» (s. f.: 194). Los partidos socialistas habrían de ser esa organización que limitara la competencia dentro de la clase al enfrentarse con sus enemigos de clase. La movilización de toda una clase es fundamental precisamente para evitar que unos determinados grupos de trabajadores erosionen la solidaridad de clase compitiendo con los miembros organizados de dicha clase trabajadora.

En segundo lugar, el énfasis en los especiales intereses de la clase obrera era necesario para evitar la integración de los trabajadores como individuos en la sociedad burguesa. Bajo el capitalismo, los capitalistas parecían ser los portadores de los futuros intereses universales, mientras que los intereses de todos los demás grupos aparecían como contrarios al desarrollo futuro y, por tanto, particularistas. El universalismo es la ideología natural de la burguesía dado que, como gentes que viven en la misma sociedad, se piensa que han de tener unos intereses económicos «generales», «comunes», o «públicos», y los capitalistas, como clase, representan esos intereses.

La nueva sociedad que se institucionalizó en la Europa occidental a resultas de la revolución industrial, era la personificación de este universalismo. Por primera vez en la historia, la clase económica dominante se retrataba a sí misma como futuro de toda la sociedad; he aquí la revolución que los burgueses introdujeron en el reino de la ideología (Gramsci, 1971: 260). Las normas legales burguesas establecían categorías universales de «individuos» iguales en sus relaciones con las cosas —independientemente de que éstas fueran medios de producción o de consumo— e iguales en sus relaciones unos con otros —de nuevo independientemente de que aparecieran contractualmente como vendedores o compradores de fuerza de trabajo (Balibar, 1970). Al mismo

tiempo, la ideología burguesa postulaba una armonía básica de intereses de individuos-ciudadanos.

Las instituciones políticas burguesas expresan esta visión de la sociedad: el parlamento había de ser el foro de deliberación racional en la búsqueda del bien común. Mientras que la economía se veía como el reino de las pasiones generadas por el egoísmo, la política, en cambio, sería el reino autónomo de la razón. Los partidos, así como otras organizaciones basadas en agrupaciones de intereses comunes, eran vistos como algo peligroso e incluso maligno. La política debía mantenerse por encima de las divisiones económicas de la sociedad.

Si el movimiento por el socialismo no entraba dentro de esta ideología y de estas instituciones, sería necesario transformar la propia visión de la política. Al racionalismo abstracto de la «política pura», los socialistas yuxtaponían una imagen que reflejaba el conflicto de intereses de una sociedad dividida en clases. En lugar del «ideal» de unos seres racionales que buscan el bien común, los socialistas proponían la «realidad» de unos hombres portadores de sus intereses de clase. La propia concepción de una sociedad basada en la armonía de intereses era tajantemente negada por la ideología del conflicto de clases.

Los socialistas afirmaban que la burguesía no sólo tenía intereses particulares sino que además éstos estaban en conflicto con los de los trabajadores. Los obreros no son «individuos» de la sociedad burguesa; son una clase diferente dentro de una sociedad dividida en clases. Si sus intereses parecen particularistas dentro de la sociedad capitalista, es porque esa sociedad está construida sobre el conflicto de los intereses particulares de las diferentes clases. Sólo separándose de las demás clases pueden los obreros trabajar en pro de sus intereses y así cumplir su misión histórica de emancipación de toda la sociedad. En su *Discurso a la Liga Comunista* de 1850 (Marx y Engels, 1969, I: 117), Marx hacía hincapié en que los obreros «tienen que hacer todo lo posible para alcanzar la victoria final aclarando sus ideas en lo relativo a cuáles son sus intereses de clase, tomando postura como partido independiente lo antes posible y no permitiendo ser seducidos ni un instante por las frases hipócritas de la pequeña burguesía demócrata para que se aparten de la organización del partido del proletariado». Rosenberg (1965: 161) da cuenta de la tendencia del socialismo alemán en la década de 1860 a «aislarse y a subrayar todas las características que lo diferenciaban de todos los demás grupos y tendencias de las clases acomodadas. En este punto el movimiento proletario radical tendía especialmente a ver a la nobleza y al campesinado, a los fabricantes y a los intelectuales como "una única masa reaccionaria"». Lo mismo puede decirse de los primeros candidatos obreros que se presentaron a las elecciones de 1863 en París (ibíd.: 165). La idea de «una sola masa reaccionaria» estaba subyacente en el Programa Gotha de 1875 y reapare-

cía en el sueco de 1889 (Tingsten 1973: 357). Aún en 1891, cuando pidieron a Engels que comentara un borrador del Erfurt Programme, éste puso reparos a una referencia a un «la gente en general» y preguntó que «¿quiénes son esos?» (s. f.: 56). Y con su típica elocuencia, Jules Guesde arguyó en Lille en 1890: «La revolución que os incumbe sólo es posible en tanto en cuanto sigáis siendo vosotros mismos, clase contra clase, sin saber y sin querer saber de las diferencias que puedan existir en el mundo capitalista» (Fiechtier, 1965: 258).

Evidentemente, la primera dificultad con que se encontraban los socialistas era que los obreros no se fiaban de toda influencia que se originara fuera de su propia clase. El socialismo se les aparecía como una ideología abstracta y extraña fuera de la experiencia diaria. Para los obreros no estaba demasiado claro el que la mejoría de sus condiciones requería que se aboliera todo el sistema de trabajo asalariado. Bergounioux y Manin dan cuenta de que según un estudio sobre los obreros franceses a comienzos de la Tercera República, los trabajadores oponían una cierta resistencia al mensaje socialista, subrayaban el conflicto directo entre trabajadores y patronos, y se olvidaban de la política (1979: 25). En Bélgica, un partido que llevaba la etiqueta socialista, el *Parti Socialiste Belge*, fundado en 1879, tenía dificultades para convencer a las asociaciones obreras de que se afiliaran. Según Landauer (1959, I: 457-8), los obreros desconfiaban de la propaganda socialista y de Paeppe decía que «a muchos obreros les asusta la palabra "socialista"». Así nació en 1885 el *Parti Ouvrier Belge*, obrero en lugar de socialista. En Gran Bretaña, los sindicalistas se negaban a que el Partido Laborista admitiera a miembros de otras clases como individuos aislados, lo que pudieron impedir hasta 1918. Si los socialistas habían de tener éxito, su partido había de ser un partido obrero. En Suecia, las primeras células locales del Partido Socialdemócrata se llamaban *Arbetare-kommuner*, Comunas Obreras (Fusiler, 1954: 29). Los socialistas querían destacar el carácter de clase de su movimiento y estaban dispuestos a llegar a compromisos de doctrina para implantar el socialismo entre los trabajadores.

## EL DILEMA DE LAS ELECCIONES

Esa mayoría que los socialistas esperaban obtener en las elecciones había de estar formada por obreros. El proletariado —actuando en pro de sus intereses y consciente de su misión— había de ser la fuerza social que precipitara a la sociedad en el socialismo. Pero ese proletariado no era y nunca llegó a ser una mayoría de votantes en ninguna sociedad. La predicción que decía que los desplazados de la vieja clase media

pasarían a ser proletarios o a engrosar las filas de los parados no se hizo realidad.

La vieja clase media, y especialmente los pequeños propietarios agrícolas, prácticamente desapareció como grupo en la mayoría de los países de Europa occidental, pero era más probable que sus hijos e hijas encontraran trabajo en una oficina que en una fábrica. Además, si bien es verdad que el número proporcional de adultos que trabajaban fuera de casa bajó drásticamente durante la época del desarrollo capitalista, los excluidos de las actividades lucrativas no se convirtieron en una reserva proletaria. La ampliación del período de educación obligatoria, la jubilación obligatoria, los grandes ejércitos permanentes, las eficaces barreras a la participación económica de la mujer, todo ello contribuyó a que disminuyera el número de los que pasaban a formar parte del proletariado. Consecuentemente, entre 1890 y 1980 éste siguió representando una parte minoritaria del electorado. En Bélgica, primer país europeo sustancialmente industrializado, la proporción de obreros sí logró sobrepasar el mágico número de la mayoría cuando, en 1912, alcanzó un 50,1 por ciento. Desde entonces ha venido declinando sistemáticamente hasta llegar al 19,1 por ciento en 1971. En Dinamarca, la proporción de obreros del electorado nunca superó el 29 por ciento. En Finlandia, el 24 por ciento. En Francia, esta proporción pasó del 39,4 por ciento en 1893 al 24,8 en 1968. En Alemania, subió del 25,5 por ciento en 1871 al 36,9 en 1903 y a partir de ese año ha venido siendo una tercera parte del electorado. En Noruega, los obreros formaban el 33 por ciento del electorado en 1894, proporción que subió hasta 34,1 en 1900. En Suecia, creció del 28,9 por ciento en 1908 al 40,4 por ciento en 1952, para bajar al 38,5 en 1964.

Las reglas del juego democrático, aunque universales y a veces justas, no tienen compasión. Para que un partido pueda gobernar solo, sin el peso de la influencia moderadora de las alianzas y las deudas del compromiso, ha de obtener una determinada proporción del total de votos, no muy lejos del 50 por ciento. Las instituciones electorales son anteriores al nacimiento de los partidos que intentaban utilizarlas como vehículo hacia el socialismo, y esas instituciones tenían dentro de sí esa regla fundamental que hace imposible la victoria de una minoría aislada. Un partido que representa a una clase social con menos miembros que las otras clases juntas no puede ganar batallas electorales.

La combinación de la categoría de minoría con el gobierno de la mayoría representa la condición histórica en que los socialistas han tenido que actuar. Esta condición objetiva obliga a los partidos socialistas a tomar una determinación: se ven obligados a elegir entre un partido homogéneo, con su llamada de clase, pero sentenciado a perpetuas derrotas electorales y un partido que lucha por el éxito en las elecciones al costo de diluir su carácter de partido de clase. No se trata de elegir

entre reforma y revolución. No hay ni una razón a priori ni pruebas históricas que hagan suponer que un partido de clase obrera pura vaya a ser más revolucionario que un partido de base más heterogénea. De hecho, los partidos obreros puros, cuyo primer ejemplo probablemente fuera el S. P. D. durante la época de Weimar (Hunt, 1970), pueden estar totalmente comprometidos con la defensa de los intereses particulares de los obreros dentro de los límites de la sociedad capitalista. Tales partidos de clase pueden convertirse muy fácilmente en meros grupos electoralistas, que presionan por conseguir una mayor parte del producto nacional sin preocupación alguna por cómo se produce éste. Un partido puramente obrero que fuera una mayoría del electorado posiblemente hubiera mantenido su compromiso final sin transacciones, como los socialistas dijeron que harían cuando vieran que la clase obrera era mayoritaria. Pero continuar como partido minoritario dedicado exclusivamente a fines fundamentales en un juego en que es necesaria la mayoría —más aún, una enorme mayoría— para obtener esos objetivos sería absurdo. Para obtener una influencia electoral con cualesquiera objetivos, desde los más fundamentales a los más inmediatos, los partidos obreros han de buscar el apoyo de miembros de otras clases.

Dada la categoría de minoría de los trabajadores dentro de la estructura de clases de las sociedades capitalistas, la decisión de participar en las elecciones altera, pues, la propia lógica del problema de la transformación revolucionaria. El sistema democrático le jugó una mala pasada a las intenciones socialistas: la emancipación de la clase obrera no podía ser tarea de los propios trabajadores si tal emancipación había de lograrse por medio de elecciones. La única cuestión era la de si se podía reclutar una mayoría para el socialismo buscando apoyo electoral fuera de la clase obrera.

Hay una peculiar tendencia entre los observadores contemporáneos a ver la estrategia de la apelación a una base de clase heterogénea como efecto relativamente reciente de la «desradicalización» de los movimientos socialistas. La *Mittelklass Strategie* alemana se ve como prototipo de esta nueva orientación y Kurt Schumacher como su arquitecto (Paterson, 1977). Según esta interpretación, los partidos socialistas empiezan a conseguir apoyo de grupos no obreros sólo después de haber renunciado a sus objetivos socialistas.

Tal opinión es sencillamente inexacta. Los partidos socialistas buscaron el apoyo más allá de la clase trabajadora tan pronto como se hizo realidad la perspectiva de la victoria electoral y a partir de entonces han estado oscilando entre la búsqueda de aliados y el énfasis en la clase obrera. La triunfalista predicción de Engels en 1895 que decía que los socialistas habían de convertirse en una fuerza ante la cual «todos los poderes tendrían que inclinarse» estaba condicionada en su opinión a que el partido «consiguiera la mayor parte de los estratos medios de

la sociedad, la pequeña burguesía y los pequeños terratenientes». Su consejo al partido francés —consejo que los franceses no necesitaban puesto que ya lo estaban haciendo (Landauer, 1961)— fue esto mismo: reclutad a los pequeños terratenientes. El Erfurt Programme de 1891 dio el tono en que se hicieron las llamadas a las «clases medias», sus intereses eran «paralelos» a los del proletariado: eran los «aliados naturales» del proletariado (Kautsky, 1971). En Francia los guesdistas comenzaron a abogar por las alianzas en cuanto Guesde salió elegido parlamentario en 1893 (Derfler, 1973: 48). En Bélgica, el primer programa que adoptó en 1894 el *Parti Ouvrier* llamaba a la clase media baja y a la intelectualidad (Landauer, 1959, I: 468). En Suecia, ya en 1889 se empezó a discutir la estrategia multiclase, y el partido se fue moviendo hacia esa orientación hasta su total aceptación en 1920 (Tingsten, 1973). El Partido Laborista británico se negó en 1912 a la propuesta de abrirse a «directivos, capataces, [y] comerciantes autónomos» (McKibbin, 1974: 95). Pero en 1918, en que su programa dio un giro hacia la izquierda, el laborismo abrió sus filas a los «obreros por el cerebro». En su polémica con Beer (1969), McKibbin interpreta el propio énfasis socialista del programa de 1918 como un intento de captar a la «clase media profesional» (1974: 97). Los revisionistas de todos los países afirmaban que los obreros no eran una mayoría y que el partido tenía que buscar apoyo fuera de la clase obrera. Bernstein, Jaures y MacDonald llegaron independientemente a la misma conclusión: una vez que el partido entra en la competencia electoral tienen que aceptar tal conclusión. En 1915 Michels ya caracterizaba la estrategia socialdemócrata así:

«Por razones fundamentalmente electorales, el partido de los trabajadores busca el apoyo de elementos pequeñoburgueses, lo que provoca reacciones dentro del propio partido. El Partido del Trabajo [laborista] se convierte en el partido del "pueblo". Sus llamamientos ya no se dirigen a los obreros manuales, sino a "todos los productores", a "toda la población trabajadora", frases que se aplican a todas las clases y a todos los estratos sociales excepto a los que viven de las rentas de sus inversiones (1962: 254)».

La orientación de los varios partidos socialdemócratas después de la guerra hacia una clase media entendida muy ampliamente no es resultado de una nueva postura estratégica sino más bien el reflejo de la cambiante estructura de clases de la Europa occidental. El número de trabajadores agrícolas disminuyó en el siglo XX, más durante la década de los 50 que durante ninguna de las anteriores. Las «nuevas clases medias» casi reemplazaron, numéricamente, a las «viejas». Las estrategias de los partidos reflejaron, si bien con algún retraso, la evolución numérica de la estructura de clases. Así pues, lo único relativamente nuevo es el indicio explícito de que los asalariados eran posibles apoyos al socialismo. Después de todo fue Bernstein, y no Schumacher ni Brandt,

el que introdujo la idea de *Volkspartei*. La búsqueda de aliados es inherente al electoralismo.

Una vez decididos a competir por los votos de los «aliados naturales», fueran éstos las viejas o las nuevas clases medias, los socialistas hacían sus llamamientos a la inmensa mayoría de la población. La estimación de Branting en 1889 de que el «pueblo» era el 95 por ciento de la sociedad sueca probablemente fuera tan sólo un poco exagerada, dada su definición de «pueblo» (Tingsten, 1973: 135). Al buscar una distribución equitativa del peso de la deuda de la I Guerra Mundial, *Labour and the New Social Order* (El laborismo y el nuevo orden social), documento programático del partido, afirmaba: «De esta manera el Partido Laborista reclama el apoyo de cuatro quintas partes de la nación» (Henderson, 1918: 125). No hay razón alguna para dudar de que hoy en día la clase trabajadora y sus aliados suman alrededor del 80 por ciento de la población de Francia (*Parti Communiste Français*, 1971) o de los Estados Unidos (Wright, 1976). Si a los obreros de la industria sumamos los empleados de cuello y corbata, los pequeño-burgueses, amas de casa, jubilados y estudiantes, apenas queda nadie para representar intereses contrarios a los del socialismo. Los explotadores tan sólo son un puñado: «El hombre de negocios con cuenta libre de impuestos, los especuladores con beneficios libres de impuestos y los directores de empresa retirados con pagas libres de impuestos» en palabras del manifiesto electoral del Partido Laborista en 1959 (Craig, 1969: 130).

Sin embargo los partidos socialdemócratas nunca obtuvieron los votos de las cuatro quintas partes del electorado de ningún país. Sólo en unos pocos casos consiguieron el apoyo de la mitad de los votantes. Están muy lejos de obtener los votos de todos aquellos a quienes dicen representar; es más, ni siquiera pueden conseguir los votos de todos los obreros, del proletariado en el sentido clásico del término. En una serie de países hasta un tercio de los obreros manuales votan a partidos burgueses. En Bélgica la mitad de los trabajadores no votan socialista (Hill, 1974: 83). En el Reino Unido, el Partido Laborista perdió al 49 por ciento del voto de la clase obrera en las elecciones de 1979. Los socialdemócratas parecen condenados a la categoría de minoría cuando son partido de clase, y parecen igualmente relegados cuando pretenden ser un partido de masas, de toda una nación. Como partido puramente obrero no pueden conseguir el gobierno para el socialismo, pero como partido de toda la nación tampoco lo logran.

Algunas de las razones por las que ningún partido político obtuvo la mayoría con un partido de transformación socialista son sin duda externas al sistema electoral, y, sin embargo, los partidos socialdemócratas se enfrentan a un dilema puramente electoral. La clase da forma a la conducta política de los individuos tan sólo en tanto en cuanto las personas que son obreros están organizadas políticamente como tales

obreros. Si los partidos políticos no movilizan a las personas como obreros sino como «masas», «pueblo», «consumidores», «contribuyentes», o simplemente «ciudadanos», será menos probable que los obreros se identifiquen como miembros de esa clase y, llegado el momento, se sentirán menos inclinados a votar como obreros. Al ampliar su llamada a las «masas», los socialdemócratas debilitan la proyección general de clase como determinante de la conducta política individual.

La estrategia orientada hacia un amplio apoyo electoral afectó no sólo a la relación entre los obreros y las otras clases, sino, principalmente a las relaciones dentro de la clase, a las relaciones entre los trabajadores. Para tener éxito en las elecciones, los partidos socialdemócratas tienen que presentarse a los diferentes grupos como un instrumento para la realización de los intereses económicos inmediatos, inmediatos en el sentido en que esos intereses pueden hacerse realidad en el momento en que el partido obtenga la victoria en las siguientes elecciones. Las alianzas más allá de la clase han de basarse en la convergencia de los intereses económicos inmediatos de la clase obrera y los de los otros grupos. Los socialdemócratas tienen que ofrecer créditos a los pequeños burgueses, pensiones a los empleados y funcionarios, salarios mínimos a los obreros, protección a los consumidores, educación a los jóvenes, descuentos familiares a las familias... Tal convergencia no puede existir de manera que refuerce la cohesión y la combatividad de los obreros contra las otras clases. Cuando los socialdemócratas amplían su llamada, se ven obligados a prometer luchar no por unos objetivos específicos de los trabajadores como clase, sino sólo por aquellos que los obreros comparten como individuos con otros miembros de otras clases. Ese terreno común puede estar en ofrecer el cambio de los impuestos indirectos a impuestos directos, leyes de protección al consumidor, transporte público y otras cosas similares. Estas preocupaciones son algo que los obreros como individuos comparten con otros que también tienen rentas bajas, que compran productos de consumo, que tienen que tomar medios de transporte para ir a su trabajo. No son intereses de los obreros como clase, sino de las personas de bajo poder adquisitivo, de los consumidores, de los que van al trabajo, etc.

Nada de esto implica que el partido haya dejado de representar a los obreros cuando hace su llamada a las masas. Aunque la convergencia de intereses nunca es perfecta, y frecuentemente se ven comprometidos algunos de los intereses específicamente obreros, el partido sigue representando aquellos intereses que los trabajadores como individuos comparten con otras personas. Por esto, algunos partidos socialdemócratas orientados hacia «el pueblo», hacia «las masas», siguen siendo partidos de los obreros como individuos, pero han dejado de ser, eso sí, una organización obrera, en el sentido de organización de clase que

imponer una disciplina a los individuos en su competencia particular al colocarlos frente a otras clases. Lo que se ve comprometido cuando los partidos obreros se convierten en partidos de masas es el propio principio de la lucha de clases, la lucha entre colectividades con una cohesión interna.

Pero ese cambio en la apelación a una clase no sólo afecta a la organización de los obreros como clase, afecta fundamentalmente a la forma de los conflictos políticos de las sociedades capitalistas dado que vuelve a instalar una visión política en que desaparece la idea de lucha de clases. Cuando los partidos socialdemócratas se convierten en partidos «de toda la nación», refuerzan su visión de la política como un proceso de definición del bienestar colectivo de «todos los miembros de la sociedad». La política vuelve a definirse en lo individual —la nación— y no en términos de clase.

Esta manera de dejar de subrayar el conflicto entre las clases también afecta a su vez a los obreros. Al hacerse menos sobresaliente la identificación con una clase, los partidos socialistas pierden su atractivo exclusivo para los trabajadores. Los partidos socialdemócratas dejan de ser cualitativamente diferentes del resto de los partidos: la lealtad a una clase deja de ser su principal base de autoidentificación. Los obreros ven la sociedad como compuesta por individuos; se ven a sí mismos como miembros de colectividades y no como miembros de una clase; se comportan políticamente sobre la base de su afinidad religiosa, étnica, regional o cualquiera otra. Se convierten en francófonos, católicos, mediterráneos, o simplemente «ciudadanos».

Vemos claramente que el dilema se nos vuelve a presentar, y ahora con una venganza, dentro del sistema de la competición electoral. La elección entre pureza de clase y amplio apoyo es algo que los partidos socialdemócratas tienen que vivir continuamente porque cuando intenta aumentar su apoyo electoral más allá de la clase obrera se reduce su capacidad de movilizar a los trabajadores. Ningún partido ha tomado esa decisión de una vez por todas ni ésta representa una evolución unidireccional. De hecho, si en el plano electoral existe un ir y venir entre el atraerse a las masas y el reclutamiento de obreros, los cambios de estrategia son imperativos obligatorios desde el punto de vista puramente electoral. Las historias de los partidos están repletas de cambios de estrategia, con sus consiguientes cambios de dirección, controversias, cismas y escisiones. El Partido Socialdemócrata Alemán volvió a destacar su condición de partido de clase en 1905; los socialdemócratas suecos abandonaron temporalmente su intento de convertirse en un partido multiclasista una vez en 1926 y otra en 1953; el Partido Laborista Noruego primó su orientación de partido de clase en 1918; los jóvenes socialistas alemanes lanzaron un serio ataque a la *Mittelklass Strategie* hace diez años; finalmente, en la actualidad asistimos al con-

flicto entre la tendencia *ouvrieriste* y la multiclasista en varios partidos. En términos puramente electorales los socialdemócratas están ante un verdadero dilema. Se ven obligados a ir adelante y atrás subrayando unas veces su llamamiento a una clase y otras a la nación. Parecen incapaces de ganar lo mismo de una forma que de otra, y se comportan como lo hacen las personas racionales cuando se enfrentan a un dilema: se lamentan y se arrepienten, cambian su estrategia, y vuelven a lamentarse.

Los socialdemócratas no han sido capaces de convertir las elecciones en un instrumento de transformación socialista. Para ser eficaces en las elecciones se ven obligados a buscar aliados que se unan a los obreros bajo la bandera del socialismo, pero a la vez minan esa ideología que es la fuente de su fuerza entre los trabajadores. No pueden seguir siendo un partido exclusivamente obrero, pero no pueden dejar de ser un partido obrero.

## REFORMA Y REVOLUCIÓN

Los socialistas empezaron a tomar parte en las elecciones con unos objetivos últimos. El Congreso de La Haya de la Primera Internacional proclamó que la «organización del proletariado en un partido político es necesaria para asegurar la victoria de la revolución social y su objetivo último: la abolición de las clases» (Chodak, 1962: 39). El primer programa sueco especifica que «la socialdemocracia se distingue de otros partidos porque aspira a la total transformación de la organización económica de la sociedad burguesa y a la liberación de la clase obrera...» (Tingsten, 1973: 118-19). Incluso el más reformista de entre los revisionistas, Millerand, advertía que «quien no admita la necesaria y progresiva sustitución de la propiedad capitalista por la propiedad socializada no es socialista» (Ensor, 1908: 51).

Estos eran los objetivos que había que alcanzar por medio de la legislación cuando, por expresión de la voluntad popular, se llegara al gobierno por medio de unas elecciones. Los socialistas iban a abolir la explotación, a hacer desaparecer la división de la sociedad en clases sociales y todas las desigualdades económicas y sociales, a terminar con toda la dilapidación y la anarquía de la producción capitalista, a erradicar todas las causas de injusticia y perjuicio. Iban a emancipar no sólo a los obreros sino a toda la humanidad, a construir una sociedad basada en la cooperación, a orientar racionalmente las energías y los recursos para satisfacción de todas las necesidades humanas, a crear las condiciones sociales para el desarrollo ilimitado de la personalidad. El racionalismo, la justicia y la libertad eran los principios rectores del movimiento socialdemócrata.

Esos eran los fines últimos; no podían alcanzarse inmediatamente, por razones tanto económicas como políticas. Y los socialdemócratas estaban deseando ver el día en que esos objetivos pudieran finalmente cumplirse. Pretendían representar los intereses de los obreros y de otros grupos no sólo en una sociedad futura, sino también dentro de la «actual», es decir, de la sociedad capitalista. El *Parti Socialiste Français*, liderado por Jaurès, proclamaba en su Congreso de Tours de 1902 que «el Partido Socialista, rechazando la política del todo o nada, tiene un programa de reformas que a partir de ahora quiere realizar», y enumeraba cincuenta y cuatro puntos específicos relativos a la justicia, la familia, la educación, los impuestos, la seguridad en el trabajo, la seguridad social, la nacionalización de las industrias, la política exterior (Ensor, 1908: 345 y sigs.). El primer programa de los socialdemócratas suecos, de 1897, exigía impuestos directos, el desarrollo de actividades productivas estatales y municipales, crédito público con control estatal directo del crédito a los campesinos, legislación sobre condiciones de trabajo, seguros de vejez, enfermedad y accidentes, igualdad ante la ley, y libertad de organización, reunión, palabra y prensa (Tingsten, 1973: 119-20).

Esta orientación hacia mejoras inmediatas nunca la vieron sus arquitectos como un alejamiento de los objetivos finales. Dado que se creía que el socialismo era inevitable, no había ninguna razón por la que los partidos socialistas no pudieran abogar por reformas inmediatas: no se corría el menor peligro, ni siquiera había la menor posibilidad, de que tales medidas pudieran evitar el advenimiento de lo inevitable. Como decía Kautsky, «sería un tremendo error imaginar que tales reformas pudieran retrasar la revolución social» (1971: 93). Esos objetivos finales iban a verse realizados porque la historia estaba de parte del socialismo. Los revisionistas de dentro del movimiento eran, en todo caso, todavía más deterministas que aquellos que abogaban por la táctica de la insurrección. Millerand, por ejemplo, argumentaba en su discurso de Saint-Mandé que «los hombres no van a instalar el colectivismo; se está implantando él sólo todos los días; está siendo secretado, por así decir, día tras día por el capitalismo» (Ensor, 1908: 50).

Incluso cuando los movimientos socialdemócratas dejaron la protección de la historia para redescubrir la justificación del socialismo en los valores éticos, las conciencias de los dirigentes no se vieron enturbiadas por ningún problema. La famosa renuncia de Bernstein a los objetivos finales no implicaba para nada que no fueran a cumplirse nunca, sino que el camino para alcanzarlos era el de concentrarse en los objetivos inmediatos. Jaurès, hablando de la conquista del poder político por los obreros, dio la imagen clásica: «Tampoco creo que tenga que haber necesariamente un salto abrupto, que haya que cruzar un abismo; quizás nos demos cuenta de que estamos entrando en la zona del

Estado socialista como los navegantes se dan cuenta de que están cruzando la línea del ecuador, no es que vean que están cruzando una cuerda que está allí colocada para que uno se dé cuenta del paso, sino que poco a poco se ven entrando en otro hemisferio gracias al avance del barco» (Ensor, 1908: 171). Evidentemente, para los socialdemócratas las reformas inmediatas eran «pasos» que se iban acumulando en el camino hacia la total reestructuración de la sociedad. Anticipándose a los argumentos de Bernstein, Georg von Vollmar, líder del ala bávara del Partido Socialdemócrata Alemán, declaraba en el Congreso de Erfurt: «Además de los objetivos generales o finales, veo otro más cercano: avanzar hacia las necesidades inmediatas del pueblo. Para mí, lo principal es la consecución de las exigencias más inmediatas, no sólo porque son de gran valor propagandístico y sirven para colocar a las masas de nuestro lado, sino también porque, en mi opinión, el progreso gradual, la socialización gradual, es el método más indicado para una transición progresiva» (Gay, 1970: 258).

Dentro de la visión del mundo socialdemócrata reforma y revolución no requieren una elección. Para que tenga lugar la «revolución social» —frase que antes de 1917 tenía connotaciones de transformación de las relaciones sociales pero no necesariamente de insurrección— es suficiente seguir el camino de las reformas... Se suele creer que las reformas son acumulativas e irreversibles; nada tenía de extraño el argumento de Jaurès de que «precisamente porque se trata de un partido revolucionario... el Partido Socialista es el más activamente reformista...» (Fichtier, 1965: 163). Cuantas más reformas y más rápidamente se introduzcan, más cerca estará la revolución social y antes entrará el navío socialista en el nuevo mundo. E incluso cuando los tiempos no son propicios para dar nuevos pasos, cuando las circunstancias políticas o económicas exigen que se pospongan las reformas, cada nueva reforma se construirá sobre las realizaciones del pasado. Mitigar los efectos del capitalismo e ir transformándolo pieza por pieza terminaría conduciendo a una total reestructuración de la sociedad. Al hacer la recensión del libro de Milliband (1969), Benjamin Barber exponía inmejorablemente esta perspectiva: «no cabe duda de que en algún punto la mitigación se convierte en transformación, la atenuación en abolición; en algún momento las «concesiones» del capitalismo aniquilarán al capitalismo... No quiero decir que se haya llegado a ese punto, sólo que tiene que llegar» (1970: 929).

## PROYECTOS ECONÓMICOS Y REALIDADES POLÍTICAS

La «revolución social» que contemplaban los socialdemócratas era necesaria porque el capitalismo era irracional e injusto. Y la causa prin-

cial de esta ineficiencia y de esta iniquidad era la propiedad privada de los medios de producción. Si bien la propiedad privada se veía a veces como la fuente de los más diversos males —desde la prostitución y el alcoholismo hasta la guerra— siempre se la consideró directamente responsable de la irracionalidad del sistema capitalista y de la injusticia y la pobreza que éste generaba.

Ya en «Socialism: Utopian and Scientific», una de las fuentes teóricas más importantes del movimiento socialista, Engels subrayaba que la creciente racionalización de la producción capitalista dentro de cada empresa iba acompañada, y tenía que irlo, por el caos y la anarquía de la producción a escala social. «La contradicción entre la producción socializada y la apropiación capitalista se presenta ahora como un *antagonismo* entre la organización de la producción en los talleres individuales y la anarquía de la producción en la sociedad en general» (1959: 97-8). En 1920, Branting repetía que «en las premisas básicas del orden social actual no hay garantías satisfactorias ni de que a la producción como entidad se le dé la orientación más racional posible ni que los beneficios de las diferentes ramas se utilicen de la mejor manera posible desde el punto de vista de la economía y la sociedad nacionales» (Tingsten, 1973: 239).

El segundo efecto de la propiedad privada es el de la injusta distribución de los beneficios materiales que genera. «La defensa económica del socialismo —escribía un teórico del Partido Laborista— se basa principalmente en la incapacidad del capitalismo para hacer una distribución equitativa, o incluso factible, de los bienes en la época de la mecanización y la producción en masa» (Cripps, 1933: 475). Incluso la ruptura más decisiva con la tradición marxista, el programa Bad Godesberg de 1959, mantenía que la «economía de mercado no garantiza por sí una justa distribución de las rentas y la propiedad».

Teniendo en cuenta este análisis, la socialización o nacionalización de los medios de producción era el método principal para la consecución de los objetivos socialistas y, por tanto, la principal tarea a realizar por los socialdemócratas tras la conquista del poder. «La revolución social siempre se entendió como socialización sistemática y deliberada bajo el liderazgo de la clase obrera socialdemócrata» (Tingsten, 1973: 131). La socialización o nacionalización —ambigüedad terminológica que tiene su importancia— era la manera en que se haría la revolución socialista.

Hasta la I Guerra Mundial, mientras los partidos socialistas concentraban sus esfuerzos en ganar votos y organizar a los obreros en una clase, poco o nada se pensó en concreto en cómo habría de realizarse la socialización. La posibilidad real de verse en posición de llevar adelante realmente un programa de socializaciones llegó a los partidos socialistas de improviso cuando la guerra destruyó el orden establecido,

desencadenó movimientos espontáneos de ocupación de fábricas y abrió las puertas a la participación gubernamental. Evidentemente, la ola de ocupaciones de fábricas que tuvo lugar en Austria, Finlandia, Italia y Suecia les pareció un peligro casi tan grande para su autoridad y su propia organización como al orden capitalista (Maier, 1975: 63; Spriano, 1967: 50-63; Williams, 1975: 121-45; Wigforss, 1924: 672).

Una vez reprimidos o agotados estos movimientos espontáneos, la lógica del parlamentarismo volvió a afianzar su garra sobre el movimiento socialdemócrata. Los esfuerzos de nacionalización resultaron ser tan similares en los diversos países que su historia es fácil de resumir. El problema de la socialización apareció inmediatamente en la agenda de los partidos socialdemócratas de Alemania, Austria, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia y en la de la C. G. T. francesa. En varios países, especialmente en Alemania, Gran Bretaña y Suecia, los respectivos parlamentos formaron sus «comités de socialización», mientras en Francia Léon Blum presentaba a la Cámara una propuesta de ley de nacionalización de los ferrocarriles y su industria. Las comisiones tenían que preparar programas detallados de socialización —en algunos casos para todas las industrias básicas y en otros para unas determinadas, la más común la del carbón. La comisión británica terminó su carrera enseguida cuando Lloyd George ignoró lisa y llanamente sus recomendaciones. Aunque los socialdemócratas formaron gobierno o entraron a formar parte del gobierno en varios países, el resultado global de estos primeros intentos de socialización fue nulo: a excepción de la industria armamentista francesa en 1936, ningún gobierno socialdemócrata nacionalizó ninguna compañía en la Europa occidental durante todo el período de entreguerras.

¿Cómo resultó que el movimiento que se había lanzado a revolucionar la sociedad cambiando la propia base de la organización de la producción terminó el período de integración en las instituciones políticas del capitalismo sin ni siquiera tocar sus fundamentos? Cuando Marx describía en 1850 la anatomía de la democracia capitalista, estaba convencido de que, excepto que se retiraran, el sufragio universal conduciría de «la emancipación política a la social», de que, una vez obtenidos los derechos políticos, los obreros procederían inmediatamente a destruir el «poder social» de los capitalistas socializando los medios de producción (1952a: 62). Aún en 1928, Wigforss veía esto como algo inevitable: «El sufragio universal es incompatible con una sociedad dividida entre una pequeña clase de propietarios y una enorme clase de desposeídos. O los ricos y los propietarios acaban con el sufragio universal, o los pobres, con ayuda del derecho de voto, se harán con una parte de la riqueza acumulada» (Tingsten, 1973: 274-5). Y, sin embargo, cuando los socialdemócratas tuvieron el poder en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Noruega y Suecia, las

riquezas permanecieron casi intactas y, evidentemente, la propiedad privada de los medios de producción permaneció intocada.

Podemos citar una serie de razones. No poco importante fue la ambigüedad teórica del propio proyecto de «expropiación de los expropiadores». Una de las dificultades estaba en la ambigua relación entre «socialización» —la entrega de las industrias a sus empleados— y «nacionalización» —que el Estado en general las dirigiera. Por un lado, como señalan Wigforss (Tingsten, 1973: 208), Korsch (1975: 68), y otros, el control directo de las empresas por los productores directos no haría desaparecer el antagonismo entre productores y consumidores, es decir, los obreros de las otras compañías. Por otro lado, el paso al control centralizado del Estado reemplazaría la autoridad privada del capital por la autoridad burocrática del Gobierno, y el ejemplo soviético ha demostrado ser suficientemente negativo. En Suecia y en Alemania dominó la corriente *gestionnaire*, llegándose incluso a incorporarla en la constitución en esta última; la tendencia *planiste* halló su principal articulación en Bélgica y Francia bajo la influencia de Henri de Man. Al acabar la I Guerra Mundial hubo una verdadera ola de constituciones: Otto Bauer hizo la de Austria en 1919, Karl Kautsky la de Alemania en 1925, G. D. H. Cole la de Gran Bretaña en 1919, Henri de Man la belga —todos se apresuraron a inventar la forma de combinar la racionalidad en el plano de la sociedad como un todo con el control de los productores directos sobre sus propias actividades.

Pero esta explosión de actividad teórica llegó retrasada respecto de las exigencias de la política práctica. El hecho, frecuentemente admitido por los políticos socialdemócratas, fue que no sabían cómo proceder a la realización de sus programas. La selección de las industrias que habían de ser nacionalizadas, los métodos de financiación, las técnicas de dirección, y las relaciones mutuas entre los diversos sectores resultaron ser problemas técnicos para los que los socialdemócratas no estaban preparados. Debido a ello, formaron comisiones de estudio y esperaron.

No obstante, la razón de la inercia socialdemócrata era mucho más profunda que la ambigüedad de sus planes. Los socialistas no obtuvieron en ningún país el suficiente número de votos para obtener la mayoría parlamentaria y poder legislar sin el apoyo, o por lo menos el consentimiento, de otros partidos. Sorprendente, sobre todo para ellos, fue el que en varios países se les invitara a formar gobierno como minoría o a compartirlo como miembros de coaliciones multipartidarias. Y el qué hacer como gobierno de minoría se presentaba como una elección entre que el partido prosiguiera tras sus objetivos socialistas y fuera derrotado rápidamente o que se comportara como cualquier otro partido, dirigiendo el sistema e introduciendo sólo aquellas reformas para las que pudiera obtener una mayoría parlamentaria.

Ambas estrategias se estudiaron en términos de sus efectos a largo

plazo. Los proponentes de la estrategia maximalista argüían que el partido educaría al electorado en lo relativo al programa socialista y expndería el carácter reaccionario de los partidos burgueses. Pretendían que la gente votara entonces mayoritariamente al partido, que volvería a gobernar, esta vez en mayoría, poniendo en práctica su programa socialista. Sólo en Noruega se adoptó esta estrategia; el gobierno duró tres días en 1928; y el partido volvió al gobierno cuatro años después tras haber moderado sus objetivos socialistas.

Los proponentes de un programa mínimo argumentaban que la tarea más importante que podía realizar el partido era la de demostrar que «servía para gobernar», que era un partido gubernamental. «No vamos a entrar en el gobierno para prepararnos para las elecciones generales —decía MacDonald en 1924— vamos a entrar en el gobierno para trabajar» (Miliband, 1975: 101). Sus esperanzas estaban en que las reformas eran irreversibles y acumulativas. Como dice Lyman:

«Los gradualistas imaginaban que el socialismo se podía implantar "a plazos", cada uno de ellos aceptado sin más oposición por parte de los conservadores que la que la oposición laborista oponía normalmente a los gobiernos Tory. Cada uno de estos "plazos" permanecería sin recibir daño alguno durante los interludios de mandato conservador, preparado para servir de cimientos sobre los que el próximo gobierno laborista continuara la construcción de la comunidad socialista.» (1965: 142-3).

Así pues, el partido entraría en el gobierno, introduciría aquellas reformas, y sólo aquellas, para las que pudiera conseguir apoyo de la mayoría parlamentaria y se marcharía para volver cuando el resultado de las urnas lo permitiera. «Esperamos continuar en el gobierno sólo el tiempo suficiente para poder hacer algún trabajo en orden a la desaparición de los muchos obstáculos que habrían entorpecido la acción de futuros gobiernos que si no habrían encontrado unos problemas que nosotros sabemos resolver.» Estas eran las intenciones del Partido Laborista en 1924 (MacDonald citado por Lyman, 1957: 106; una declaración similar de Branting en 1920 está recogida en Tingsten, 1973: 238). De aquí que Blum introdujera una distinción entre el «ejercicio del poder» y la «conquista del poder», dado que, como minoría, los socialistas sólo podían ejercerlo, pero tenían que ejercerlo de tal manera que en su momento les condujera a su conquista (Colton, 1953).

## EL COMPROMISO

Si los socialistas no podían llevar adelante un inmediato programa de nacionalización, ¿qué podían ir haciendo? Podían tomar una serie

de medidas que mejoraran la situación de los obreros, y las tomaron: programas de vivienda, introducción de legislación acerca del salario mínimo, protección al desempleo, impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, pensiones de vejez. Tales medidas, aunque favorecían a los trabajadores, no eran ni imposibles en el plano político ni chocantes en el económico —continuaban la tradición reformista de Bismarck, Disraeli y Giolitti. Eran medidas que no modificaban ni la estructura económica ni el equilibrio político de las diversas fuerzas.

El hecho es que hasta la década de 1930 los socialdemócratas no tuvieron ningún tipo de política económica propia. La teoría económica de la izquierda era la de criticar el capitalismo, declarar la superioridad del socialismo, y moverse hacia un programa de nacionalización de los medios de producción. Una vez suspendido —que no abandonado— ese programa, no quedaba ninguna política económica socialista (Bergounioux y Manin, 1979: 110). Los socialistas se comportaban como todos los demás partidos, con alguna tendencia hacia una mayor distribución, pero totalmente respetuosos para con los dorados principios del equilibrio del presupuesto, la política deflacionaria anticrisis, el patrón oro, etc., etc. La descripción que hace Skidelsky del Partido Laborista es válida, en líneas generales, para todos: «La política cultural inglesa era relativamente homogénea. Había unas ideas rectoras, o modelos de pensamiento, que todo hombre sensato tenía que aceptar. Lo mismo podemos decir del pensamiento económico. Los políticos de la década de 1920 desplegaron todo un enorme arsenal de conocimientos económicos, como una especie de codificación de lo que para ellos eran los éxitos del siglo XIX...» (1970: 6). De Blum se dice que «no era capaz de ver un estadio intermedio entre el doctrinarismo socialista puro y el libre juego del capitalismo...» (Wall, 1970: 541), y lo mismo parece que ocurría con todos los demás. La única teoría reformista era la que reclamaba la nacionalización y no había ninguna otra alternativa coherente.

Esa alternativa había de surgir como respuesta a la Gran Depresión. En Suecia, en Noruega y, en menor grado, en Francia, los gobiernos socialistas respondieron al desempleo con una serie de medidas anticíclicas que rompieron la ortodoxia económica existente. Sigue siendo materia de discusión si la política económica sueca se desarrolló autónomamente, de Marx vía Wicksell, o si fue una aplicación de las ideas de Keynes, que ya habían empezado a circular (Gustafsson, 1973). De hecho los socialdemócratas de todos los países enseguida descubrieron en las ideas de Keynes, sobre todo después de la aparición de su *General Theory*, algo que necesitaban urgentemente: una política diferente para la administración de las economías capitalistas. La revolución keynesiana —y de esto se trataba— dio un objetivo a los socialdemócratas y, a partir de éste, una justificación para su papel en el gobierno,

y a la vez transformó el significado ideológico de la política distributiva favorecedora de la clase obrera.

De víctima pasiva de los ciclos económicos, el Estado se vio convertido de la noche a la mañana, o casi, en una institución gracias a la cual las sociedades podían regular las crisis para mantener el empleo total. Al describir las medidas del gobierno sueco en 1932, Gustav Möller, el arquitecto del programa de desempleo, subrayaba que anteriormente la ayuda al paro era un «sistema pensado para proveer las necesidades más básicas del parado, y no tenía el objetivo de contrarrestar la depresión... Los ciclos económicos, se decía, siguen las leyes naturales de la economía y la interferencia del gobierno es, lisa y llanamente, inútil y, desde el punto de vista financiero, incluso peligrosa a largo plazo» (1938: 49). Tanto Möller como Wigforss (1938) describen cómo los socialdemócratas suecos descubrieron que el desempleo puede reducirse y vigorizarse toda la economía si el Estado se fija una política anticíclica, permitiendo déficits para financiar obras públicas productivas durante las depresiones y pagando las deudas durante los períodos de expansión. La sociedad no está indefensa ante los caprichos del mercado capitalista, la economía puede controlarse, y el bienestar de los ciudadanos puede aumentarse continuamente por medio del papel activo del Estado: este fue el descubrimiento de los socialdemócratas.

Pero esto no era todo, el keynesianismo no sólo era una teoría que justificaba la participación socialista en el gobierno sino que además, incluso más casualmente desde el punto de vista socialdemócrata, era una teoría que así de pronto daba una categoría universal a los intereses de los trabajadores. Anteriormente todas las demandas de aumento del consumo se veían como enemigas del interés nacional; mayores salarios significan menores beneficios y por tanto una reducción de las posibilidades de inversión y de futuro desarrollo. La única respuesta concebible a la crisis era reducir los costos de producción, esto es, los salarios. Y ésta seguía siendo la opinión del Partido Laborista en 1929. Pero en la lógica de la teoría de Keynes, unos salarios más altos, sobre todo si se aumentaba el fondo salarial aumentando el empleo más que el índice de salarios (que no subió en Suecia hasta 1936), significaba un aumento de la demanda, lo que implicaba una mejora de las expectativas de beneficios, un aumento de la inversión y, de aquí un estímulo para la economía. Aunque en el caso del *Front Populaire* francés tampoco está claro si su política estuvo influida o no por las obras de Keynes (Colton, 1969: 198), éste introdujo una estrategia en que «aumentando los salarios, reduciendo la semana de trabajo, elaborando un programa de obras públicas, y gastos de viajes y vacaciones... el poder de adquisición y la demanda de consumo subirían, la industria aumentaría la producción para hacer frente a la creciente demanda... y se lograría vencer la depresión» (Colton, 1969: 190). El significado del aumento

de salarios pasó de ser visto como un impedimento para el desarrollo económico de la nación a ser visto como un estímulo. Ahora se podía decir que los intereses particulares a corto plazo de los obreros y demás gentes que consumían la mayor parte de sus ingresos coincidían con los intereses a largo plazo de la sociedad en su conjunto. La defensa corporativista de los intereses de los obreros, política que los socialdemócratas siguieron durante los años veinte, y la estrategia electoral hacia el «pueblo» encontraba hora su justificación ideológica en una teoría económica técnica. Los propios términos del discurso ideológico se transformaron; «los costos del servicio de salud —escribía Bertil Ohlin en 1938 (1938: 5)— representaron una inversión en el más valioso instrumento de producción de todos, el propio pueblo. En los últimos tiempos se ha visto claramente que esto mismo es verdad de otras muchas formas de consumo como la alimentación, el vestido, o el recreo. De aquí que se ponga el énfasis en la política social productiva...» Pero esta revolución implicaba otra: «La tendencia —continúa Ohlin— va en dirección hacia la nacionalización del consumo en oposición a la nacionalización de los medios de producción del socialismo marxista».

El giro keynesiano pronto llevó a los socialdemócratas a desarrollar una completa ideología del «Estado benefactor» (Briggs, 1961). Los socialdemócratas definieron su papel como el de modificadores del juego de las fuerzas sociales, abandonando, de hecho, totalmente el proyecto de nacionalización. La exitosa aplicación de los instrumentos keynesianos se vio como demostración de que la nacionalización —llena de problemas e incertidumbres como se había demostrado— no sólo era imposible de llevar a cabo por la vía parlamentaria sino también innecesaria. El propio Keynes escribió que «no es la propiedad de los instrumentos de producción lo que es importante que asuma el Estado. Si éste es capaz de determinar el conjunto de recursos dedicados a aumentar los instrumentos y el índice básico de recompensa a aquellos a quien se la debe, habrá realizado lo necesario» (1964: 378). Como continúa argumentando Wigforss (Lewin, 1975: 286) el que el Estado se convirtiera en propietario de las industrias particulares tendría como consecuencia únicamente el que el gobierno socialista se viera obligado a comportarse como una empresa capitalista, sujeta al «caos del mercado», mientras que por medio del control indirecto el Estado puede racionalizar la economía en su conjunto y orientarla hacia el bienestar común.

La base teórica de esta nueva perspectiva estaba en la distinción entre la idea de propiedad como autoridad para dirigir y propiedad como posesión legal. Ya Bernstein proclamaba que «lo principal de la socialización es colocar la producción, la vida económica, bajo el control de la red pública». (Citado por Korsch, 1975: 65.) En lugar de la propiedad directa, el Estado podía alcanzar todos los objetivos socialistas in-

fluyendo sobre la industria privada para que actuara en bien del interés general. Como decía Man en 1934 (Bergounioux y Manin, 1979: 114), «la esencia de la nacionalización es menos la transferencia de la propiedad que la transferencia de la autoridad...» Si el Estado fuera capaz de regular la industria privada cuando fuera necesario y pudiera mitigar los efectos del libre juego de las fuerzas del mercado, la propiedad directa sería innecesaria y desaconsejable, y esto se convirtió en la consigna de la socialdemocracia tras la revolución keynesiana.

En suma, incapaces como gobiernos de minoría de llevar a cabo el programa socialista, la socialdemocracia encontró a mediados de los años treinta una línea política clara que justificaba su papel en el gobierno, que especificaba una serie de reformas intermedias que podían realizarse con éxito dentro de los confines del capitalismo, y gracias a las cuales obtuvieron en varios países una buena plataforma electoral. Cogidos en la década de los veinte en una posición de todo o nada, los socialdemócratas descubrieron un nuevo camino de reforma abandonando el proyecto de las nacionalizaciones y del bienestar general. El nuevo proyecto sí incluía un compromiso fundamental con aquellos que seguían siendo denunciados como explotadores, pero era factible en lo económico, benéfico en lo social y, quizás lo más importante de todo, políticamente factible en condiciones de democracia.

## EL ABANDONO DEL REFORMISMO

El abandono de la nacionalización programática de los medios de producción no implicaba que el Estado nunca entrara en las actividades económicas. En los países de la Europa occidental contemporánea, entre el 5 y el 20 por ciento del producto bruto lo producen empresas cuyo propietario es total o parcialmente el Estado (*Le Monde*, 1977). Los senderos por los que se mueve este «sector público» son demasiado variados para hacer aquí su recuento. En España y en Italia el sector público es en su mayor parte un legado del fascismo; en Austria está formado fundamentalmente por propiedades confiscadas a Alemania; en Gran Bretaña y Francia una ola de nacionalizaciones siguió a la II Guerra Mundial. Las verdaderas nacionalizaciones —el traspaso de propiedades privadas existentes a propiedad estatal— han sido muy escasas, pero en varios países el Estado ha desarrollado actividades económicas propias. En la mayor parte las empresas públicas tienen la misma categoría legal y funcionan con la misma lógica que las privadas; el Estado limita su papel al de un simple accionista. En Italia, Gran Bretaña y Francia las empresas estatales han sido utilizadas ocasionalmente como instrumentos de la política económica. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, la filosofía general de la propiedad pública es am-

pliamente compartida: los socialdemócratas defienden el libre mercado siempre que es posible y la propiedad pública cuando es necesario.

Lo característico es que las empresas estatales se limiten a las entidades crediticias, el carbón, el hierro y el acero, la producción y distribución de energía, el transporte y las comunicaciones. Fuera de estos sectores sólo aquellas compañías que se ven amenazadas por la bancarrota y, por tanto, por la reducción de personal pasan a manos del Estado. Los casos en que el Estado produce y vende los productos finales en el mercado son enormemente raros; parecen estar limitados a la industria del automóvil. El Estado se compromete en aquellas actividades económicas necesarias para la economía en su conjunto y vende sus productos y servicios en general a compañías privadas que, a su vez, venden a los consumidores. De aquí que el Estado no compita con el capital sino que suministre los inputs necesarios para el buen funcionamiento de la economía en su conjunto.

La división entre Estado y mercado se ha guardado como una reliquia en la «teoría de los bienes públicos del Estado» (Samuelson, 1966; Musgrave, 1971). Esta teoría da por sentado que el mercado capitalista es una forma natural de la actividad económica; da por hecho la existencia de ese mercado y de sus leyes. El papel del Estado se supone que debe limitarse a la provisión de los llamados «bienes públicos»: aquellos que no pueden dividirse y que pueden servirse a todos si se les sirven a algunos. Es tarea del Estado construir carreteras públicas o formar a la mano de obra; los empresarios privados no pueden encargarse de ello ya que no pueden impedir a la gente que utilice las carreteras ni que vendan sus nuevas adquisiciones en el campo del trabajo a la competencia. Así pues, se da por hecho que el papel del Estado ha de limitarse a aquellas actividades que no son beneficiosas para los empresarios privados pero que son necesarias para la economía en su conjunto. Bien es verdad que en varios países el Estado también se ocupa de la producción de bienes privados —como el carbón o el acero— pero también en estos casos la transferencia al sector público se hizo, con contadísimas excepciones, cuando y porque esas industrias habían dejado de producir beneficios en el comercio internacional. Evidentemente esas industrias eran las que más fácilmente podían nacionalizarse y mantenerse en el sector público ya que sus propietarios no tenían ninguna razón para luchar contra la nacionalización de industrias no rentables.

Así pues, la estructura de los sistemas capitalistas que construían los socialdemócratas resultó ser la siguiente: 1) el Estado se encarga de aquellas industrias no rentables para las compañías privadas pero necesarias para la economía en su conjunto; 2) el Estado regula, sobre todo poniendo en práctica políticas anticíclicas, el funcionamiento del sector privado; y 3) el Estado mitiga, con medidas de bienestar social,

los efectos de la desigual distribución del funcionamiento del mercado.

Las actividades regulatorias del Estado se basan en la creencia de que a los capitalistas particulares se les puede influir para que distribuyan sus recursos como los ciudadanos quieren que se haga manifestándolo mediante las urnas. La idea básica es que en las democracias capitalistas los recursos se distribuyen siguiendo dos mecanismos: el del «mercado», en que el peso de las preferencias de los que toman las decisiones es proporcional a los recursos que controlan, y el del Estado, en que el peso de las preferencias se distribuye por igual entre todos los ciudadanos. La esencia de la socialdemocracia contemporánea es la convicción de que el mercado puede dirigirse hacia esas inversiones, públicas o privadas, que prefieren los ciudadanos y que racionalizando gradualmente la economía, el Estado puede ir transformando a los capitalistas en funcionarios privados de lo público sin alterar la condición judicial de la propiedad privada.

La intervención del Estado en la economía ha de guiarse por criterios de eficacia, profundamente diferentes de la preocupación por la justicia. La idea de eficacia es independiente de cualesquiera consideraciones acerca de la justa distribución. La eficaz asignación de recursos —a la luz de los criterios que comparten los políticos y que se consideran técnicos— es aquella en que nadie puede mejorar sin que el otro empeore. Con este tipo de inversiones unos cuantos pueden estar mucho mejor que los demás, pero el problema de la distribución general se soluciona mejor, según esta teoría, al ser tratado *ex post*. De aquí que la política social de los socialdemócratas consista fundamentalmente en mitigar los efectos distribucionales de la inversión de recursos guiada por criterios de eficiencia y eficacia. Esta política no está pensada para transformar el sistema económico sino sólo para corregir los efectos de su funcionamiento.

Habiéndose comprometido a mantener la propiedad privada de los medios de producción, a garantizar la eficacia y a mitigar los efectos de la distribución, la socialdemocracia dejó de ser un movimiento reformista. (Véase especialmente la opinión de Brandt en Brandt, Kreisky y Palme, 1976.) El reformismo siempre significó una progresión gradual hacia transformaciones estructurales; se justificaba tradicionalmente por la creencia de que las reformas eran acumulativas, que eran pasos que llevaban en una determinada dirección. Por su propia lógica, la actual política de los socialdemócratas ya no permite la acumulación de reformas.

El abandono del reformismo es una consecuencia directa de anteriores reformas realizadas. Dado que el Estado se ocupa casi exclusivamente de aquellas actividades que no son rentables desde el punto de vista de los inversionistas privados, se ve privado de los recursos financieros necesarios para continuar el proceso de nacionalización. Si

las industrias de propiedad pública fueran las más rentables, los beneficios que produjeran podrían utilizarse para comprar o desarrollar otras industrias, pero al ocuparse de los sectores deficitarios, los socialdemócratas minaron su posibilidad de ir ampliando gradualmente el sector público. Además, tampoco podemos dejar de tener en cuenta los efectos ideológicos: se creó una situación en la que el sector público es notoriamente ineficiente según los criterios del capital privado que ha dado como resultado un golpe al crecimiento del Estado. Es decir, las empresas que aterrizaron en el sector público fueron en su mayoría aquellas que, según los criterios capitalistas, no eran rentables, y ahora se quiere hacer creer que son deficitarias porque son del Estado. De aquí que la preocupación principal de todos los gobiernos, socialistas o no socialistas, sea la de reducir costos, lo que a su vez significa que las industrias de propiedad pública no puedan ni siquiera utilizarse como instrumentos de política macroeconómica, por ejemplo, manteniendo bajos los precios del acero para reducir las presiones inflacionarias.

Al mismo tiempo, al reforzar el mercado, los socialdemócratas perpetúan la necesidad de mitigar los efectos de la mala distribución que causa su funcionamiento. Las reformas en el campo del bienestar ni siquiera tienen que «deshacerlas» los gobiernos burgueses, basta con dejar que el mercado funcione por sí mismo, sin correctores, durante un tiempo para que aumenten las desigualdades, fluctúe el empleo, los cambios en la demanda de mano de obra dejen nuevos grupos expuestos al empobrecimiento, etc., etc. Como dice Martin refiriéndose a Inglaterra, «la "estructura básica del Estado de bienestar con empleo total" no resultó tan duradero como nos induciría a pensar el análisis de Crossland, pero ello no se debió a que lo desmantelaran los gobiernos conservadores que se sucedieron entre 1951 y 1964. Lo único que tuvieron que hacer los gobiernos conservadores para minar el Estado de bienestar con empleo total fue no hacer nada para contrarrestar tales procesos» (1975: 28). La mitigación no se convierte en transformación: de hecho, sin transformación la necesidad de mitigar se convierte en algo eterno. Los socialdemócratas se hallan en la misma situación que Marx atribuía a Luis Bonaparte: sus líneas políticas parecen contradecirse ya que por un lado se ven obligados a reforzar el poder productivo del capital y por otro a contrarrestar sus efectos.

El resultado final de esta orientación es que los socialdemócratas se encuentran con que no tienen una alternativa clara propia frente a la crisis del sistema internacional. Cuando están en el gobierno están obligados a actuar como cualquier otro partido, apoyándose en medidas deflacionistas y de reducción de gastos para garantizar la rentabilidad del sector privado y la capacidad de inversión. Las medidas orientadas a aumentar la democracia en los lugares de trabajo —reciente redescubrimiento de los socialdemócratas (Brandt, Kriesky y Palme, 1976)— son

un eco, nada sorprendente, del movimiento de los años veinte, otro período en el que la izquierda careció igualmente de un enfoque macroeconómico propio. Estas medidas no van a resolver los acuciantes problemas económicos. Falta por ver lo que pasa si la actual crisis internacional mina gravemente el apoyo del electorado a la socialdemocracia.

## FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DEL COMPROMISO DE CLASE

En cuanto los socialdemócratas formaron gobiernos tras la I Guerra Mundial, descubrieron que su preocupación por la justicia no era compatible con el objetivo de aumento de la productividad. Como dice Wigforss, «dado que la socialdemocracia lucha por una distribución de la propiedad más igualitaria y más justa, no ha de olvidar nunca que hay que producir antes de poder distribuir» (Tilton, 1979: 516). La voluntad de restaurar y ampliar la capacidad de producción pasó rápidamente a dominar las primeras discusiones acerca de la socialización de la industria en Alemania y Suecia (Maier, 1975: 194; Tingsten, 1973: 230). No cabe duda de que la promesa socialista no consistía en una justa distribución de la pobreza, para alcanzar una general afluencia los socialdemócratas tuvieron que centrar sus esfuerzos en aumentar la productividad.

Pero sin la nacionalización de los medios de producción, los aumentos de productividad exigen que las empresas privadas sean productivas. En tanto en cuanto el proceso de acumulación sea privado, la sociedad en su conjunto dependerá del mantenimiento de los beneficios privados y de las inversiones que los capitalistas hagan de estos beneficios. De aquí que la eficacia de los socialdemócratas —como la de cualquier otro partido— en la regulación de la economía y la mitigación de los efectos sociales, dependa de la rentabilidad del sector privado y de la voluntad de cooperación de los capitalistas. La propia capacidad de los socialdemócratas para regular la economía depende de los beneficios del capital. He aquí una barrera estructural insalvable: cualquier línea política tiene un límite, y éste consiste en que, a largo plazo, hay que proteger tanto inversiones como, consecuentemente, beneficios. Dado que los beneficios son privados, las decisiones de los capitalistas particulares en lo tocante al volumen y dirección de las inversiones condiciona la eficacia de las intervenciones del Estado y hay que anticiparlas. El Estado que interviene en la economía depende de la actuación de los capitalistas para su recaudación de impuestos, para recabar datos, para ser capaz de elaborar líneas políticas y planificar, para su capacidad de suministrar servicios sociales, etc. Además, el propio apoyo electoral a cualquier gobierno determinado depende de la actuación de los capitalistas. La gente no vota exclusivamente por «bienes públicos»

cuando vota a un partido; vota contra el gobierno actuante cuando baja su renta personal o aumenta el desempleo (Kramer, 1971; Stigler, 1973). Así pues, todos los partidos dependen del capital privado incluso para poder seguir en el gobierno.

En la sociedad capitalista, todo gobierno depende del capital (Offe y Runge, 1975: 140). La naturaleza de las fuerzas políticas que llegan al poder no afecta esta dependencia ya que es estructural; es una característica del sistema y no de los que ocupan los puestos de gobierno, de los ganadores de las elecciones. Estar «en el poder» no da mucho poder: los socialdemócratas están sujetos a la misma dependencia estructural que todos los demás partidos.

El compromiso básico de los socialdemócratas con el capital privado es, pues, expresión de la propia estructura de la sociedad capitalista. Cuando se deja intacta la propiedad de los medios de producción, a los asalariados les interesa que los capitalistas tengan beneficios. Bajo el capitalismo los beneficios de hoy son condición *sine qua non* de la inversión y, por tanto, de la producción, el empleo y el consumo de mañana. Como dice el ex canciller de la República Alemana Helmut Schmidt, «los beneficios de las empresas hoy son las inversiones de mañana, y las inversiones de mañana son el empleo de pasado mañana» (*Le Monde*, 6 de julio de 1976). Esta esperanza —que los beneficios actuales se transformen en futuras mejoras de las condiciones materiales de vida de los asalariados— se convirtió en la base de aceptación del capitalismo por los socialdemócratas. Éstos aceptan el derecho de los capitalistas a detentar una parte del producto social porque los beneficios que retiene el capital se espera que sean ahorrados, invertidos, transformados en capacidad de producción y parcialmente distribuidos como ganancias a otros grupos. Así pues, tal consentimiento tiene una base económica: es un reflejo de los intereses materiales de los asalariados dentro de la sociedad capitalista.

Los socialdemócratas protegen los beneficios de las demandas de las masas porque la política redistributiva radical no beneficia a los asalariados. Nadie hizo el plan detallado, pero el sistema capitalista está pensado de tal manera que si los beneficios no son suficientes, los índices salariales o el empleo acaban cayendo. Las crisis del capitalismo no interesan a nadie, son una amenaza para los asalariados ya que el capitalismo es un sistema en el que las crisis económicas caen inevitablemente sobre sus hombros.

Por eso es por lo que los socialdemócratas cambiaron la abolición de la propiedad privada de los medios de producción por la cooperación de los capitalistas en el aumento de la producción y la distribución de beneficios. Por esto es por lo que los socialdemócratas no sólo procuran reproducir el capitalismo sino que luchan por mejorarlo incluso en contra de la resistencia de los propios capitalistas. La nacionaliza-

ción de los medios de producción ha resultado ser electoralmente impracticable, las líneas políticas de redistribución radical traen consigo crisis económicas que no convienen a los asalariados; puede lograrse una mayor fluencia para todos si los capitalistas se ven obligados a cooperar y los asalariados a esperar siempre.

## SOCIALDEMOCRACIA Y SOCIALISMO

Los socialdemócratas no van a llevar las sociedades europeas al socialismo. Incluso en el caso en que los obreros prefirieran vivir bajo el socialismo, el proceso de transición ha de llevar necesariamente a una crisis antes de poder organizar el socialismo. Para llegar a las cumbres hay que atravesar los valles, y estos descensos no pueden realizarse en democracia.

Supongamos que los socialdemócratas ganaran las elecciones e intentaran utilizar su posición para hacer una transición democrática al socialismo. Dada la estructura social de las sociedades capitalistas, esa victoria electoral sólo es posible si pueden conseguir el apoyo de diferentes grupos: obreros industriales, trabajadores no manuales, pequeña burguesía, pequeños propietarios y obreros agrícolas, amas de casa, jubilados y/o estudiantes. Consecuentemente las presiones para que mejore las condiciones materiales parten de diferentes grupos, por lo que se hace necesario subir los salarios, especialmente el mínimo o «vital» (*sueldo vital* en Chile, *SMIC* en Francia), reducir el desempleo, elevar las mejoras sociales, abaratar los créditos para la pequeña empresa y el campo y aceptar un mayor riesgo... Tales demandas pueden financiarse con 1) una redistribución de la renta personal (por medio de impuestos directos y reduciendo las diferencias salariales), 2) aumentando la utilización de la capacidad latente, 3) gastando las reservas de moneda extranjera o con préstamos y/o 4) reduciendo el índice de beneficios (Kolm, 1977). La suma de las tres primeras fuentes no será suficiente para satisfacer las demandas. La redistribución de las rentas más altas no tiene demasiado efecto, y no se puede llevar demasiado abajo sin afectar el apoyo electoral de los empleados. Al activar repentinamente la capacidad latente se forman embotellamientos y se agota con rapidez. Las reservas extranjeras deben gastarse con sumo cuidado si no se quiere dejar la moneda a merced de prestamistas extranjeros y especuladores. Además, incluso si las cuentas salen bien respecto del dinero, una economía organizada para producir determinados productos y servicios no puede transformarse de la mañana a la noche para satisfacer las nuevas demandas.

Obligados a pagar salarios más altos y mantener el empleo por encima de los niveles de eficiencia, los capitalistas sólo pueden responder

aumentando los precios de los bienes de consumo. La inflación también crece por las dificultades de la balanza de pagos provenientes de la necesidad de importar bienes de consumo y por las presiones de la especulación. Así pues, o se pone en funcionamiento la dinámica inflacionaria o, si se mantiene el control de precios, hace su aparición la escasez, el mercado negro, etc., etc. Llegado un momento los aumentos nominales de salario se convierten en nada, como en Francia en 1936 (Kalecki, 1936), en Chile y en Portugal.

En circunstancias normales cabe esperar que el aumento de demanda estimule las inversiones y el empleo. Las medidas redistributivas, incluso en el caso en que incluyan emisión inorgánica, se justifican generalmente apelando no sólo a la justicia sino también a la eficiencia. Conforme aumentan los salarios más bajos, aumenta la demanda de los bienes de consumo. La utilización de la capacidad latente y de divisas se ve como un parachoques que protege los precios del aumento de demanda durante el corto período anterior al remonte de las inversiones y, en su caso, al crecimiento de la oferta. Se espera que los beneficios del aumento de ventas se reinviertan, estimulándose la economía que se desarrollará a un ritmo más rápido. Este fue, por ejemplo, el programa Vuskovic en Chile —no del todo descabellado en circunstancias normales.

No obstante tal programa no puede funcionar con éxito cuando las demandas económicas crecen espontáneamente y están acompañadas por transformaciones estructurales. En estas circunstancias las exigencias salariales suelen tocar techo, y los capitalistas esperan que el gobierno las fuerce o, por lo menos, las condone. Como dice Bevin, «nos encontraremos con que tenemos que escuchar las demandas de nuestra propia gente» (Lyman, 1957: 219). El aumento de la intervención gubernamental significa precisamente que en el proceso de acumulación se impone la lógica del no-mercado, es decir, que los capitalistas se ven obligados a hacer inversiones no óptimas desde el punto de vista de los beneficios. Medidas gubernamentales tales como las de nacionalización, distribución de tierras y monopolización del crédito y las divisas ponen en peligro la propia institución de los beneficios privados. En tales circunstancias, los capitalistas particulares no invierten. No son necesarios ni organizaciones políticas ni conspiraciones; los empresarios lógicos no invierten cuando los beneficios posibles son nulos o negativos y el riesgo es alto.

Y, sin embargo, la producción tiene que continuar pues, como dice Kautsky, «si no continúa la producción, toda la sociedad, proletariado incluido, perecerá. El proletariado victorioso, pues, no sólo tiene razones más que suficientes para facilitar la continuación de la producción capitalista en todos los sectores en que no es recomendable la inmediata socialización, sino que además ha de impedir que la socialización

desencadene una crisis económica» (1925: 273). Pero esos capitalistas cuyos medios de producción están a salvo de la socialización por el momento no invertirán si temen que ésta pueda llegar a realizarse. Por esto es por lo que Lange (1964: 125) dice que la nacionalización hay que hacerla «de golpe»:

«El gobierno socialista que realmente quiera implantar el socialismo tendrá que decidirse a poner en práctica su programa de socializaciones todo de golpe, o no ponerlo en absoluto. La mera subida al poder de tal gobierno desencadenará un pánico financiero e incluso un desastre económico. Así pues, el gobierno socialista tendrá que garantizar la inmunidad de la propiedad y de la empresa privada para que la economía capitalista pueda continuar funcionando normalmente, y al hacerlo habrá abdicado de sus objetivos socialistas, o tendrá que poner en práctica con resolución su programa de socializaciones a la mayor velocidad posible.»

No obstante, aun cuando el gobierno socialista actúe con resolución, incluso en el caso en que haga todo lo necesario para dar garantías a los pequeños empresarios y propietarios como recomienda Lange, la transformación de las relaciones de producción irá acompañada de una crisis económica. Las presiones hacia el consumo inmediato siguen operando tanto para las empresas públicas como para las privadas. Aun en el caso en que estas empresas se autogestionen, siempre saldrán mejor poniendo precios altos a sus productos. Los problemas que impiden el rápido paso a la producción de bienes de consumo son físicos, no meramente organizativos. Es más, la nacionalización genera sus propios problemas económicos. Fuera o no una estrategia política deliberada, como sostienen Bologna (1972) y Marglin (1974), la producción capitalista fue reorganizada bajo el sistema de consejos, de manera que los productores inmediatos, como clase, perdieron su capacidad para dirigir por sí mismos el sistema de producción. La clase obrera que estudió Marx se caracterizaba no sólo por su explotación sino también por su capacidad de organizar, a escala social, el sistema socialista de producción. No obstante, aunque esto haya sido así alguna vez, hoy no es posible que los productores inmediatos asuman instantáneamente el control del proceso de producción socializada: posiblemente cualquier cocinero pueda aprender a administrar la sociedad socialista, pero sin duda necesitará un largo aprendizaje. La transformación socialista exige una capacidad de organización y de administración que no pueden adquirirse del día a la noche. No existen planes detallados y la experiencia es limitada. Se aprende a base de pruebas y errores y los problemas son inevitables.

Así pues, la transición al socialismo genera crisis económica. Las inversiones caen fuertemente, los precios suben, se erosionan las subidas de salarios, baja la producción, afloja la demanda, reaparece el paro

como problema importante. Lo que no es, pues, posible es aquella parte del programa de Allende que decía: «el modelo político hacia el socialismo que está aplicando mi gobierno exige que la revolución socio-económica se lleve a cabo a la vez que una ininterrumpida expansión económica» (De Vylder, 1976: 53). Lo que no es posible es que, como pretendía Blum, «una mejor distribución... reavive la producción al mismo tiempo que satisface la justicia» (Weill-Raynal, 1956: 54). Lo que no es posible es una transición al socialismo que comience con «un aumento sustancial de los salarios y...» (*Parti Socialiste Français, Parti Communiste Français*, 1972: I. 11).

Enfrentados a la crisis económica, amenazados por una pérdida del apoyo electoral y preocupados con la posibilidad de una contrarrevolución fascista, los socialdemócratas abandonan el proyecto de transición o por lo menos hacen una pausa para esperar tiempos mejores. Tienen el valor de explicarle a la clase obrera que es mejor continuar siendo explotados que crear una situación que pueda volverse contra ellos. Se niegan a arriesgarse a que se agrave la crisis. Ofrecen un compromiso que mantienen y defienden. Pero sigue en el aire la cuestión de si hay una forma de salirse de la alternativa que definió Olof Palme: «o volver a Stalin y Lenin, o tomar el camino que lleva a la socialdemocracia» (Brandt, Kreisky, Palme, 1976: 120).

## Capítulo 2

### EL PROLETARIADO DENTRO DE UNA CLASE. PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS CLASES

#### INTRODUCCIÓN

Las dificultades de la teoría marxista para analizar la estructura de clases de las sociedades capitalistas concretas ya había aparecido en el momento de la formación del movimiento socialista. Sus raíces hay que buscarlas en la formulación que hace Marx de una problemática en que los procesos de formación de clases se ven como transición necesaria de una «clase-en-sí» a una «clase-por-sí», formulación en que las relaciones económicas tienen categoría de condiciones objetivas y todas las demás relaciones son reinos de actos subjetivos.

En lugar de esta formulación podemos considerar aquella otra, también sugerida por Marx, en que las condiciones económicas, políticas e ideológicas juntas estructuran el terreno de luchas que tienen por efecto la organización, desorganización o reorganización de clases. Las clases han de verse, pues, como efecto de luchas estructuradas por condiciones objetivas simultáneamente económicas, políticas e ideológicas.

El análisis de clase es un tipo de análisis que enlaza el desarrollo social con luchas entre actores históricos concretos. Tales actores, colectividades-en-lucha en un determinado momento de la historia, no están determinados únicamente por condiciones objetivas, ni siquiera por el conjunto total de condiciones políticas, económicas e ideológicas. Precisamente porque la formación de la clase es producto de unas luchas, los resultados de este proceso son hasta cierto punto imprevisibles.

El análisis de clase no puede limitarse a aquellas personas que ocupan un lugar dentro del sistema de producción. Es consecuencia necesaria del desarrollo capitalista que una parte de la fuerza de trabajo so-